Se trata de una actividad, la de los traductores, silenciosa, tenaz, que procura ser meticulosa y organizada, que se realiza en la sombra, pero que no por ello es menos importante en su finalidad y en sus consecuencias: hacer que los ciudadanos, los dirigentes, los jueces, los funcionarios, los agentes sociales y económicos de Europa se comprendan entre sí y comprendan las reglas del juego en esta nueva Babel, sin que tengan que renunciar a su propia voz.

Dempster (2005), citado por Borja (2005)
ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 1
   1.1. Motivación .......................................................................................................................... 1
   1.2 Objetivo .................................................................................................................................. 2
   1.3 Metodología .......................................................................................................................... 3
2. IDENTIFICACIÓN DEL TEXTO ...................................................................................................... 5
   2.1 Directiva: definición .............................................................................................................. 5
   2.2 Estructura de una Directiva .................................................................................................. 6
3. COMPARACIÓN DE TEXTOS ....................................................................................................... 7
   3.1 Léxico ..................................................................................................................................... 7
   3.2 Otros aspectos ....................................................................................................................... 18
      3.2.1 Fecha .............................................................................................................................. 18
      3.2.2 Gerundios ..................................................................................................................... 18
      3.2.3 Concordancia tiempos verbales .................................................................................. 19
      3.2.4 Calco: “a nivel comunitario” ....................................................................................... 20
      3.2.5 Uso de Shall (en) .......................................................................................................... 20
      3.2.6 Fraseología .................................................................................................................... 21
      3.2.7 Uso de mayúsculas ....................................................................................................... 24
4. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 25
5. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................... 29
6. ANEXO 1: ORIGINAL Y TRADUCCIONES ................................................................................. 31
7. ANEXO 2: TEXTOS PARALELOS ............................................................................................... 86
8. ANEXO 3: GUÍA PRÁCTICA COMÚN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA
   COMISIÓN ..................................................................................................................................... 92
1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se inscribe en el ámbito de la traducción especializada jurídico-económica inglés-español. El documento objeto de estudio es una Directiva del Parlamento Europeo y de la Comisión, por ende, pertenece al ordenamiento jurídico comunitario. El tema que trataremos es el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

1.1. Motivación

Nuestro especial interés por la Unión Europea y sus instituciones surgió tras haber asistido a una conferencia impartida en la Universidad Pompeu Fabra a cargo de Dirk Meert, traductor de la Comisión Europea. Durante su disertación expuso el método de trabajo de los traductores de la Comisión y proporcionó algunos ejemplos prácticos. Esto nos sirvió como introducción al amplio mundo de la traducción de la UE, en el que se traducen textos en numerosos campos de especialización.

Del contenido de la conferencia pudimos concluir la importancia que tiene la actividad normativa comunitaria en los Estados miembros y en el contexto internacional. La legislación emanada de las instituciones de la UE afecta a la vida diaria de sus ciudadanos porque el ordenamiento jurídico comunitario prevalece con respecto a los Derechos de los Estados miembros. Cada Estado parte cede a la Unión ámbitos de sus competencias soberanas y por lo tanto, su legislación debe recoger todas las disposiciones comunitarias. (Abellán, 2000: 122)

La UE se creó después de la segunda guerra mundial con la esperanza de poner fin a los conflictos entre países vecinos y de alcanzar una paz duradera. Esta organización internacional ha conocido cinco ampliaciones desde su creación en 1957, inicialmente fueron seis países fundadores y en la actualidad son veintisiete. Desde enero de 2007 hay 23 lenguas oficiales y su legislación se publica en todas ellas. (EUROPA, la UE en breve). Este aspecto multilingüe es uno de los motivos que nos ha llevado a estudiar la situación del traductor comunitario que se encuentra inmerso en un sistema multicultural.
El uso de las distintas lenguas no sólo refleja la diversidad cultural y lingüística sino que también garantiza el funcionamiento democrático de la organización. Cada Estado miembro, en el momento de firmar el Tratado de adhesión a la Unión estipula qué idioma desea que se declare lengua oficial de la UE. Todo lo anterior nos ha impulsado a investigar sobre cómo se efectúa la traducción del inglés al español de una Directiva comunitaria. En efecto, la cultura jurídica en la que se originan los documentos influye en la correspondencia entre la terminología de la lengua de partida y la de la lengua meta, pero ¿de qué cultura jurídica tratamos en este caso? Si normalmente la traducción jurídica consiste en pasar de una lengua a otra y de un sistema jurídico a otro, en la UE, el sistema es uno solo, todas las lenguas comparten el mismo universo jurídico.

En lo que concierne al tema del presente trabajo, hemos elegido la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero porque es un problema alarmante que se ha acentuado considerablemente en los últimos años. El incremento de las temperaturas, el deshielo de los glaciares, las inundaciones y sequías son cada vez mayores. Se ha comprobado que el calentamiento global se debe a la emisión de gases de efecto invernadero consecuencia directa de la actividad realizada por el hombre. Este fenómeno es uno de los mayores desafíos de la humanidad, y su solución, una causa por la que todos deberíamos luchar.

1.2 Objetivo
El propósito principal de este trabajo es comparar las versiones en inglés y en español de la Directiva 2003/87/CE, relativa al régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. A partir de esta comparación atenderemos a otros propósitos:

- Identificaremos los rasgos que son característicos de las Directivas: el léxico, la gramática, la estructura y otros aspectos lingüísticos y jurídicos (la naturaleza del texto, la finalidad, el público al que va dirigido). Esto es esencial puesto que la operación traductora está sometida a todas estas variables. Con este tipo de textos el simple conocimiento lingüístico y el dominio de las palabras no es suficiente, es necesario conocer todo lo que envuelve al documento, su realidad, una realidad definida a partir del ordenamiento jurídico.
- Determinaremos qué método de traducción se utilizó, es decir, cuál es la opción global del traductor ante el conjunto del texto. ¿Ha optado por una traducción que se ajusta a la formulación del original o bien por una interpretación más libre? Además, reflexionaremos sobre el método de traducción en relación con el sistema multilingüe de la UE.

- Mediante la realización de nuestra propia traducción detectaremos las posibles imprecisiones ya sean léxicas, sintácticas o de otra clase en las versiones publicadas por la UE. Es importante que no se cometen errores de traducción en este tipo de documentos porque posteriormente actuarán como documentos modelo para el desarrollo de las legislaciones estatales. Cuando cada Estado adapta su legislación de acuerdo con las disposiciones de la Directiva, es muy probable que adopte términos o frases que se encuentran en el acto comunitario. Si el término no es preciso la aportación a la cultura jurídica que lo recoge será pobre e inadecuada.

1.3 Metodología

La metodología usada en el presente trabajo puede considerarse en dos partes: en primer lugar, un estudio del material teórico y en segundo lugar, la realización de una propia versión de traducción que será contrastada con las versiones publicadas.

En la primera parte realizaremos un estudio sobre la estructura orgánica de la UE y las funciones de sus instituciones, con especial atención al Parlamento Europeo y al Consejo, dado que son los órganos revestidos de potestad legislativa. Utilizaremos la página web del Portal de la Unión Europea (EUROPA.eu) y algunos de los textos que se citan en la Directiva 2003/87/CE, que facilitarán la contextualización e identificación de los documentos objeto de análisis. Éstos son:

- Protocolo de Kyoto, concluido en 1997 con el fin de reducir en un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales para el periodo 2008-2012.
- La Directiva 96/61/EC, modificada por la Directiva 2003/87/EC
- El Tratado Constitutivo de la Unión Europea
- El libro Verde sobre el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea
En la segunda parte, efectuaremos una lectura del texto en inglés, identificando las posibles dificultades de traducción. Una vez detectadas, las separaremos en dos categorías: el léxico y otros aspectos (como la fraseología o el uso de gerundios).


Posteriormente, buscaremos textos paralelos en ambos idiomas, que desempeñarán una importante función ya que muchas veces la definición del diccionario no es suficiente. Debemos ir más allá y analizar el significado de los términos en contexto, y así observar las semejanzas con otros textos que tienen un contenido jurídico similar. Entre otras fuentes complementarias utilizaremos el portal de derecho de la UE (EUR-lex.europa.eu). Por otra parte, con el fin de contrastar el léxico, realizaremos una tabla en la que figurarán: los términos de las versiones publicadas, nuestra propia elección de traducción y la investigación realizada. Ésta incluirá las diferentes definiciones con una explicación que justifica nuestra opción de traducción.

Para tratar los otros aspectos utilizaremos los boletines normativos y terminológicos del vademéculum del traductor externo, la Guía Práctica Común (GPC) y el Manual de traducción: Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica (Borja, 2007). Finalmente, traduciremos los fragmentos que son significativos para el trabajo. Para ello consultaremos la GPC, que sienta las bases para la redacción de la legislación comunitaria.

En definitiva, la primera se dedicará a la identificación del texto y la segunda, a nuestro mayor propósito: la comparación de los textos y el análisis de las distintas dificultades de traducción. Finalizaremos el trabajo con las conclusiones y la bibliografía. Asimismo, incluiremos tres anexos consistentes en: el original y las traducciones, los textos paralelos y la Guía Práctica Común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (GPC).
2. IDENTIFICACIÓN DEL TEXTO

A continuación definiremos la Directiva, en cuanto acto jurídico, utilizando dos fuentes de referencia y señalaremos cuál su estructura para poder entrar en un análisis más detallado.

2.1 Directiva: definición

De acuerdo con el Diccionario de Derecho (Durán, 1995) la Directiva es:

El acto institucional comunitario que obliga a los Estados miembros a conseguir un determinado resultado, dejándoles en libertad para escoger el medio y la forma adecuados para conseguir el resultado previsto en la Directiva. Como el Reglamento, la Directiva es una disposición de aplicación general; pero así como el Reglamento obliga con un contenido normativo ya articulado en su texto, la Directiva obliga a sus Estados miembros a adoptar las disposiciones legislativas o reglamentarias necesarias para que se consiga la finalidad establecida en la Directiva. Aunque normalmente las Directivas están destinadas a todos los países comunitarios, hay Directivas específicamente dirigidas a uno o más Estados. El plazo de cumplimentación de la Directiva por los Estados suele ser previsto en la misma.

La Síntesis de la Legislación de la página web EUROPA.eu explica que en el proyecto de Tratado constitucional, la Directiva cambia de nombre y pasa a llamarse «Ley Marco Europea». En principio, la Comisión presenta la Directiva y corresponde adoptarla al Consejo y al Parlamento Europeo, en el marco del procedimiento de codecisión. A veces, aunque muy raramente, se delega esta posibilidad en la Comisión. La Directiva entra en vigor una vez notificada a los Estados miembros o publicada en el Diario Oficial.

No obstante, la entrada en vigor no implica un efecto directo en las legislaciones nacionales. Para ello es necesaria una segunda operación: la transposición, que es un acto adoptado por los Estados miembros consistente en la aprobación de medidas nacionales destinadas a ajustarse a los resultados fijados por la Directiva. Las autoridades nacionales deben comunicar estas medidas a la Comisión

Procedimiento de codecisión
El Tratado de la Unión Europea incorporó el denominado procedimiento de codecisión, recogido en el artículo 251 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que otorga al Parlamento un peso similar al del Consejo a lo largo del procedimiento legislativo y le permite, en última instancia, rechazar la adopción de determinados actos relativos al establecimiento del mercado interior así como a otros ámbitos de actuación comunitaria. Este procedimiento se abre cuando, después de su segunda lectura, el Parlamento Europeo manifiesta la intención de rechazar la posición común del Consejo, o bien el Consejo decide no adoptar las enmiendas introducidas por el Parlamento. Se convoca entonces al denominado Comité de conciliación, el cual “procurará alcanzar un acuerdo sobre un texto conjunto”. Este Comité puede lograr un proyecto común que, de ser aprobado por el Consejo por mayoría cualificada y por el Parlamento por mayoría absoluta, conduce a la adopción final del acto. (Abellán, 2000: 96)

2.2 Estructura de una Directiva

En el portal del derecho de la UE (Eur-lex.europa.eu) está disponible la Guía Práctica Común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, que menciona cuáles son las partes de este acto comunitario:

Todos los actos comunitarios de alcance general se redactarán conforme a una estructura modelo (título, preámbulo, parte dispositiva y, en su caso, anexos).

El «título» incluye las indicaciones que figuran en el encabezamiento del acto y que permiten identificarlo. Puede ir seguido de algunos datos técnicos (mención de la lengua en la que el texto es auténtico y de la pertinencia a efectos del EEE, número administrativo, etc.) que se intercalan, cuando proceda, entre el título propiamente dicho y el preámbulo. Por «preámbulo», se entiende el texto que se encuentra entre el título y la parte dispositiva del acto, es decir, los vistos, considerandos y fórmulas solemnes que les acompañan. La «parte dispositiva» es la parte normativa del acto. Está compuesta de artículos agrupados en títulos, capítulos y secciones.
3. COMPARACIÓN DE TEXTOS

3.1 Léxico

3.1.1 Allowance/ Derechos de emisión

<table>
<thead>
<tr>
<th>Versiones UE</th>
<th>Versión propia</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(en) Original: Allowance</td>
<td>(es) Traducción: derechos de emisión</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Este término podría traducirse por “cantidad de gases permitida/fijada”. Sin embargo, tras haber leído atentamente el Protocolo de Kyoto en español decidimos que el término más preciso es “derechos de emisión”. En el artículo 17 se utiliza para referirse a la autorización concedida a una Parte Contratante de emitir una determinada cantidad de gases expresada en dióxido de carbono durante un período concreto. No obstante, en la versión inglesa no se utiliza “emission allowance trading” sino “emission trading” (Vid. ANEXO 2. a).

La Directiva 96/61/CE no habla de “allowance” sino de “emission limit values”, “valores límite de emisión”:

«valores límite de emisión»: la masa expresada en relación con determinados parámetros específicos, la concentración o el nivel de una emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados. Los valores límite de las emisiones también podrán establecerse para determinados grupos, familias o categorías de sustancias, en particular para las mencionadas en el Anexo III.

Más adelante, la Directiva 2003/87/CE proporciona la definición de derechos de emisión en el artículo 3:

"derecho de emisión: el derecho a emitir una tonelada equivalente de dióxido de carbono durante un período determinado, válido únicamente a efectos del
cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva, siendo este derecho transferible de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva"

En la ley española 1/2005, de 9 de marzo, se ha transpuesto el término “derecho de emisión” y se proporciona una definición. (Vid. ANEXO 2.b) En la actualidad este concepto se utiliza con frecuencia. Por ejemplo: el Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre, aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (Vid. ANEXO 2.c).

3.1.2 Amend/Enmendar

| Versiones UE | Versión propia |
| (en) Original: Amending | (es) Traducción: por la que se modifica | Traducción: que modifica |

En primer lugar veremos cuáles son las definiciones de los sustantivos derivados de los verbos "amend" y "enmendar".

Oxford Companion to Law (Walter, 1980)

Amendment: An alteration to some text, by substitution, alteration or addition, or any combination of these methods, intended to improve it in some aspect.

Diccionario de Derecho (Durán, 1995)

Enmiendas: Es la etapa inicial de la fase constitutiva del proceso legislativo; dicha fase comprende asimismo toda la tramitación parlamentaria y termina cuando la ley es aprobada por las Cortes Generales. La presentación de enmiendas es uno de los atributos básicos de la función parlamentaria, puesto que permite la debida corrección de los textos legales en régimen de colaboración por todos los miembros de las cámaras.

Tal como indican las definiciones, las enmiendas son correcciones, cambios que se proponen sobre el documento inicial. Sin embargo, cuando utilizamos el verbo
"enmendar" y "modificar" en español, debemos tener en cuenta que existe una diferencia. Por ejemplo, el Parlamento y el Consejo presentan propuestas de enmiendas (amendments) a un determinado proyecto de Directiva. Una vez aprobada dicha directiva, modifica (amends) las anteriores directivas con el mismo contenido. Por lo tanto no sería correcto decir:

“La Directiva 2003/87/CE que enmienda la anterior Directiva”


En el procedimiento presupuestario (Tratado CE, art. 272), el Parlamento puede enmendar el proyecto en lo que respecta a los gastos no obligatorios o presentar propuestas de modificación en lo que respecta a los gastos obligatorios (los que resultan obligatoriamente del Tratado o de los actos adoptados por las instituciones) sobre los cuales el Parlamento no tiene competencia. (Abellán, 2000: 94)

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea recoge esta distinción:

Artículo 272.4

"El Parlamento Europeo tendrá derecho a enmendar, por mayoría de los miembros que lo componen, el proyecto de presupuesto y a proponer al Consejo, por mayoría absoluta de los votos emitidos, modificaciones al proyecto respecto de los gastos que resulten obligatoriamente del Tratado o de los actos adoptados en virtud de éste."

Para investigar a fondo cuál es el uso de estas palabras, nos hemos puesto en contacto con Luis González, terminólogo del Departamento español de la Dirección General de Traducción (Bruselas) quien muy amablemente nos explica cómo se deben utilizar estos términos. A continuación proporcionamos la respuesta que nos fue enviada desde la Comisión:

El verbo “amend” siempre se debe traducir por “modificar” y no por “enmendar”. En cuanto a la traducción de “amendment” al español, el término “enmienda” se utiliza solo para las propuestas del Parlamento Europeo en el contexto de los
procedimientos contemplados en los artículos 251 y 252 del Tratado CE. En el procedimiento presupuestario (Tratado CE, art. 272), el Parlamento puede ENMENDAR el proyecto (en lo que respecta a los gastos no obligatorios) o presentar propuestas de MODIFICACIÓN (en lo que respecta a los gastos obligatorios, sobre los cuales el Parlamento no tiene competencia).

En el resto de los casos que se refieren a las Directivas o Reglamentos, el término “amendment” se tiene que traducir por “modificación”. Compare los siguientes ejemplos:

**EN:** Whereas, as a result, the following regulations affected by amendment of the subheadings of the abovementioned CN codes should be amended:

**ES:** Considerando que, por lo tanto, procede modificar los siguientes Reglamentos afectados por la modificación de las subpartidas de los códigos NC mencionados:

**EN:** After appropriate consultations, the Commission shall submit its conclusions as to potential amendments to this Directive, together with amendment proposals, if need be.

**ES:** Tras proceder a las consultas adecuadas, la Comisión presentará sus conclusiones respecto a las modificaciones que puedan introducirse en la presente Directiva, acompañadas, en su caso, de propuestas de modificación.


**ES:** DIRECTIVA 97/38/CE DE LA COMISIÓN de 20 de junio de 1997 por la que se modifica el Anexo C de la Directiva 92/51/CEE del Consejo relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE del Consejo (Texto pertinente a los fines del EEE)

**EN:** COUNCIL REGULATION (EC) No 423/97 of 3 March 1997 amending Regulation (EEC) No 3433/91 in respect of imports originating in Thailand and imposing definitive antidumping duties on imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters originating in Thailand, the

**ES:** REGLAMENTO (CE) N° 423/97 DEL CONSEJO de 3 de marzo de 1997 por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3433/91 con respecto a las importaciones originarias de Tailandia y se establecen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de encendedores de bolsillo no recargables, de gas y piedra, originarios de
3.1.3 *Article/Artículo*

<table>
<thead>
<tr>
<th>Versiones UE</th>
<th>Versión propia</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><em>Article</em></td>
<td><em>artículo</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>

La traducción de “article” parece muy simple pero puede resultar un problema de traducción porque en el caso de las leyes en inglés, “section” se traduce por “artículo” en español, como es el caso de la Ley Patriótica de los Estados Unidos (Patriot Act) (Vid. ANEXO 2 d).

El Diccionario Espasa de Términos Jurídicos (Watson, 2003) lo deja en claro:

*Artículo*: article; (de una ley) section

Podríamos decir que en toda la legislación europea (Reglamentos, Tratados, Decisiones, Directivas) se utiliza el término “article” y “artículo”. Esto está establecido por la directriz 15 de la guía práctica del Parlamento Europeo, del Consejo y la Comisión.

En el ordenamiento jurídico español, los cuerpos legales se subdividen en “título”, “capítulo” "sección" y "artículo". La Guía Práctica Común explícita cómo se deben utilizar estos términos según la extensión y complejidad de la parte dispositiva. (Vid. ANEXO 2 e).
3.1.4 Relevant/ Pertinente, en materia de

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Versiones UE</strong></td>
<td><strong>Versión propia</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>(en) Original: with EEA relevance</td>
<td>(es) Traducción: pertinente a efectos del EEE</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Traducción: aplicable al EEE</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Relevant/Relevance son términos que pueden tener distintas traducciones según el contexto. Por ejemplo, el adjetivo “relevant” puede traducirse por “en la materia” (Vid. ANEXO 2.f).

En este caso, estamos hablando de que un texto puede aplicarse en el Espacio Económico Europeo, por eso nuestra opción de traducción es “aplicable” (Vid. ANEXO 2.g). No obstante, la directriz nº 7.1 de la Guía Práctica Común expresa lo siguiente:

> Título: (...) “Puede ir seguido de algunos datos técnicos (mención de la lengua en la que el texto es auténtico y de la pertinencia a efectos del EEE, número administrativo, etc.)”.

3.1.5 Opinion/Dictamen

<table>
<thead>
<tr>
<th>“Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee(2)”</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Versiones UE</strong></td>
<td><strong>Versión propia</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>(en) opinion</td>
<td>(es) Traducción: dictamen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Traducción: dictamen</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En este supuesto, "opinion" es un término jurídico y no debe confundirse con el significado de "opinión" en español. Puesto que lo emite el Comité Económico y Social Europeo, habiendo investigado las funciones de estas instituciones consultivas confirmamos que el término correcto es "dictamen" (Vid. ANEXO 2. h)
Las siguientes son definiciones de fuentes especializadas que clarifican el concepto:

Oxford Companion to Law (Walter, 1980)

Opinion: (3) A statement by a court or judge of the law relative to a case and of his reasons for reaching a particular decision of the case, as distinct from the order made by him. In the House of Lords, the judgements of the Lords of Appeal are called options or speeches.

Diccionario de Derecho (Durán, 1995)

Dictamen: Es el acto institucional comunitario elaborado sólo a título consultivo y a instancia de tercero; es decir, no se emite nunca un dictamen por propia iniciativa de la misma institución que formula aquélla. El dictamen o informe carece de fuerza vinculante, a través de él las instituciones comunitarias expresan su parecer y toman posición sobre temas determinados. En definitiva, el dictamen es la expresión de una opinión sobre una cuestión determinada, emitida por una institución comunitaria y a instancia de tercero.

3.1.6 Cost-effective/ Eficaz en relación con el coste

<table>
<thead>
<tr>
<th>Versiones UE</th>
<th>Versión propia</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(en) cost-effective</td>
<td>Traducción: eficaz en relación con el coste</td>
</tr>
</tbody>
</table>

La traducción de "cost-effective" resulta muy controvertida. En inglés "cost-effective" refleja claramente la relación entre el coste de la medida y el resultado alcanzado. La definición que proporcionan la mayoría de los diccionarios bilingües es "rentable", que podría considerarse una buena opción de traducción. Sin embargo, este término es ambiguo en español. Según la definición del Diccionario de uso de español (Moliner, 2007) "rentable" significa: Susceptible de producir renta o buena renta. El Diccionario de la Real Academia Española (Gómez, 1999) proporciona una definición similar:

rentable. adj. Que produce renta suficiente o remuneradora.
Ahora bien, estudiemos el siguiente supuesto en el que la traducción de “cost-effective” por “rentable” resulta ambigua: imaginemos que una determinada empresa se ve obligada a introducir una nueva tecnología para contaminar menos. Esta no va a ganar más, sino menos. Lo que expresa el término inglés en un contexto como éste es que con la menor inversión posible se consiga el mayor efecto, pero no que la inversión vaya a ser económicamente rentable. (Punto y Coma: Cabos Sueltos) A fin de evitar ambigüedades, consideramos que lo mejor es parafrasear el término.

A continuación añadimos la definición de Business Dictionary (Isaacs, 1993):

Cost-effective: 1. able to achieve a goal with the minimum of expenditure. 2. able to achieve a goal with an expenditure that makes the achievement viable in commercial terms. The M25, for example, could have been built as eight-lane, rather than six lane, motorway but this was erroneously thought not to be cost effective.

La Transposición de la Directiva a ley española no hace mención al coste y utiliza directamente “eficaz”.

“…para fomentar reducciones de las emisiones de estos gases de una forma eficaz y de manera económicamente eficiente.”

En el Libro Verde este término se traduce por “económica”. (Vid. ANEXO 2. i) Además, en la Síntesis de la Legislación (Régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero) se traduce por “de forma ventajosa” (Vid. ANEXO 2. j) Las opciones de traducción son muy diversas. Como se puede apreciar, no hay una traducción uniforme de este término y nos hemos referido a la Base de datos terminológica multilingüe de la UE (IATE) para proporcionar otros ejemplos (Vid. ANEXO 2. k).

3.1.7 Breach/ Infringir

<table>
<thead>
<tr>
<th>“Member States shall ensure publication of the names of operators who are in breach of requirements to surrender sufficient allowances under Article 12(3).”</th>
</tr>
</thead>
</table>

| Versiones UE | Versión propia |
| (en) Original: with EEA relevance | (es) Traducción: que hayan infringido la obligación | Traducción: que incumplan con la obligación |

Puesto que la diferencia entre infringir e incumplir es muy sutil, en primer lugar deberemos analizar las distintas definiciones en ambas lenguas.


**Breach:** to break a law, promise, agreement or relationship:
They breached the agreement they had made with their employer.


**Breach**
1) n. literally, a break. A breach may be a failure to perform a contract (breaking its terms), failure to do one's duty (breach of duty, or breach of trust), causing a disturbance, threatening, or other violent acts which break public tranquility (breach of peace), illegally entering property (breach of close), not telling the truth-knowingly or innocently-about title to property (breach of warranty), or, in past times, refusal to honor a promise to marry (breach of promise). 2) v. the act of failing to perform one's agreement, breaking one's word, or otherwise actively violating one's duty to other.

Diccionario Espasa de Términos Jurídicos (Watson, 2003)

**Breach:** n. (de la ley) incumplimiento; pol. (de relaciones) ruptura

Diccionario de Términos Jurídicos (Varó, 2001)

Breach: v. incumplir, contravenir, violar, vulnerar; los términos *breach, violation, infringement* y *transgression* tienen en común "el quebrantamiento de una norma, la violación de un derecho, el incumplimiento de un deber o la alteración de una situación social deseada o normal"; *breach* es el más general; *violation* connota que ha habido intención; *infringement* normalmente se aplica a normas reglamentarias; *transgression* sugiere que se han excedido los límites morales, sociales o religiosos más que jurídicos. *breach of condition* (incumplimiento de una cláusula o condición contractual), *breach of duty* (incumplimiento de un deber).
Diccionario de Derecho (Durán, 1995)

Incumplimiento: Desobediencia. No acatamiento de leyes, disposiciones u órdenes. No cumplimiento de lo debido por ley o acuerdo previo. El incumplimiento supone una actitud negativa, fundamentada en la omisión de la conducta debida.

Consideramos que la traducción más apropiada es "que incumplan" porque hay una diferencia de matices entre "infringir" e "incumplir". Tras haber analizado los diferentes verbos, hemos concluido que una obligación o deber se cumple o no, por lo contrario, una norma reglamentaria se puede infringir. En esta Directiva quiere decir que el Estado miembro no entrega derechos de emisión suficientes. Por otra parte en la GPC hay una directriz que menciona “breach” y es traducido por “incumplimiento”:

5.3.2. Por lo que se refiere a la terminología propiamente jurídica, es necesario evitar los términos demasiado vinculados a los ordenamientos jurídicos nacionales. Ejemplo:

el concepto de «faute» bien conocido en Derecho francés, no tiene equivalente exacto en otros sistemas jurídicos (en particular, en el Derecho inglés y en el Derecho alemán); por tanto, es preferible utilizar, según el caso, términos como «illégalité» (ilegalidad), «manquement» (incumplimiento) (de una obligación), etc., que pueden traducirse fácilmente a las otras lenguas: por «illegality » o «breach», respectivamente.

3.1.8 Provisions/Disposiciones

<table>
<thead>
<tr>
<th>“Community provisions relating to allocation of allowances by the Member States”</th>
<th>Versiones UE</th>
<th>Versión propia</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(en) Original: provisions</td>
<td>(es) Traducción: disposiciones</td>
<td>Traducción: disposiciones</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Al traducir "provisions" debemos ser cuidadosos para no incurrir en la mala traducción de "provisiones". Estas palabras constituyen falsos amigos que, por la similitud entre las raíces de las voces en lengua origen y lengua término dificultan la comprensión del significado del texto, ya que presentan diferencias semánticas notables (Borja, 2007: 134)
¿Y qué son las disposiciones? Son todos los puntos que constituyen la parte normativa del acto. Hemos extraído los fragmentos de la guía Práctica Común que hacen referencia a las disposiciones:

En la medida de lo posible, la parte dispositiva se redactará conforme a una estructura modelo (objeto y ámbito de aplicación, definiciones, derechos y obligaciones, disposiciones por las que se otorgan competencias de ejecución, disposiciones en materia de procedimiento, medidas de aplicación, disposiciones transitorias y finales).

La parte dispositiva se subdividirá en artículos y, según su extensión y complejidad, en títulos, capítulos y secciones. En los artículos que contengan listas, conviene diferenciar cada elemento de la lista con letras o números, mejor que con guiones.

15.1. La estructura modelo de la parte dispositiva está formada por elementos textuales varios de los cuales responden a normas de presentación más o menos estrictas. Así ocurre con los siguientes elementos:

1) objeto y ámbito de aplicación (véase la directriz 13);
2) definiciones (véase la directriz 14);
3) disposiciones que atribuyen competencias de ejecución. Las disposiciones en el ámbito de la «Comitología» siguen las normas de presentación que se reflejan en los modelos de LegisWrite;
4) medidas de aplicación. Las disposiciones relativas a las normas de desarrollo y a las fechas para la transposición de una Directiva por los Estados miembros siguen un esquema fijo (véase LegisWrite). Otras disposiciones, por ejemplo, las que se refieren a las sanciones que deben preverse a nivel nacional, o a las vías de recurso que deben garantizarse, están previstas también de una forma estandarizada;
5) disposiciones transitorias y finales. Esta categoría de elementos incluye:
   — la posible derogación de actos previos (véase la directriz 21). Si la fecha de esta derogación no coincide con la entrada en vigor del acto que debe adoptarse, dicha fecha deberá especificarse claramente;
   — las normas de transición del antiguo al sistema nuevo. Es necesario utilizar un lenguaje, y sobre todo mencionar fechas, que no dejen lugar a dudas respecto al periodo en el que la antigua normativa, o una parte de ésta, sigue siendo aplicable de manera residual, una vez que el nuevo sistema haya entrado en vigor;
   — las disposiciones modificativas del acto anterior (véase la directriz 18);
   — el ámbito temporal de aplicación (véase la directriz 20).

15.2. Los otros elementos (los derechos y obligaciones, así como las disposiciones en materia de procedimiento) representan la parte propiamente normativa del acto, y
3.2 Otros aspectos

3.2.1 Fecha
La expresión de las fechas en español muchas veces ocasiona confusión ya que se pueden escribir de diferentes maneras. En el Boletín nº 33 del vademécum del traductor externo se establece la normativa:

- En español, las fechas pueden escribirse con letras, con una combinación de letras y números o sólo con números.
- No es frecuente escribir las fechas enteramente con letras. Suele hacerse sólo en documentos especialmente solemnes. Un caso en este sentido, recogido expresamente por el LEI (10.3.1), es la fórmula final de datación de los acuerdos internacionales:
  - Hecho en Bruselas, el dos de marzo de mil novecientos setenta y cuatro

El sistema más común, sin embargo, combina cifras y letras. En este caso, el día y el año se escriben con números arábigos, y el mes con letras e inicial minúscula. Se escribe primero el día, después el mes y finalmente el año, intercalándose siempre la preposición «de» entre día y mes y entre mes y año:
  - 1 de enero de 2002

3.2.2 Gerundios
El uso de gerundio resulta problemático al traducir del inglés al español. El siguiente ejemplo ilustra un cambio de categoría gramatical. En inglés las cláusulas de gerundio funcionan como modificador directo de “Directive”. En español este uso del gerundio no existe, por lo que debemos formular una cláusula relativa: “que establece…”, “y que modifica…”


Este uso del gerundio no suele ocasionar mayores problemas. Sin embargo, nos detendremos en el uso de “Considerando lo siguiente”, “whereas” en inglés. Esta
expresión fijada es de uso jurídico. En la Guía Práctica Común se explica qué son los “considerandos”:

10.1. Se entiende por «considerandos» la parte del acto que contiene la motivación de éste y que se incluye entre los vistos y la parte dispositiva del acto. La motivación comienza por «Considerando lo siguiente:» y continúa con puntos numerados (véase la directriz 11) formados por una o por varias frases complejas. Se formula de modo no imperativo ya que no debe confundirse con la parte dispositiva.
10.2. La motivación de los reglamentos, Directivas y decisiones es obligatoria. Tiene por objeto dar a conocer a toda persona interesada las condiciones en que el autor del acto ejerció la competencia relativa al acto en cuestión (véase el asunto 24/62) y conceder la posibilidad a las partes de un litigio de defender sus derechos, así como al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de efectuar su control.
10.3. Si es necesario recordar el contexto histórico del acto, el relato seguirá el orden cronológico de los hechos. Los elementos de la motivación de las disposiciones específicas del acto siguen el orden de éstas.

3.2.3 Concordancia tiempos verbales.
Hemos encontrado un caso en que el traductor no ha mantenido la concordancia de los tiempos verbales y usa el pretérito perfecto cuando sería más apropiado el indefinido.

Versión publicada en español

En sus conclusiones de 8 de marzo de 2001, el Consejo reconoció la gran importancia del Programa Europeo sobre el Cambio Climático y del trabajo basado en el Libro Verde, y ha señalado la necesidad urgente de acciones comunitarias concretas.

Creemos que se debería haber mantenido la concordancia con el pretérito indefinido. Al principio de la frase tenemos una fecha, hablamos de un momento puntual acabado en el pasado y esto condiciona a toda la frase. Además, en inglés se utiliza en las dos ocasiones el mismo tiempo verbal (past simple).
3.2.4 Calco: “a nivel comunitario”
Como lo explica Fernando Lázer en El Dardo en la Palabra, esta expresión "llegó por vía francesa (niveau de vie), a finales de los cuarenta y metafóricamente representa una altura relativa”. Pero también proviene del inglés:

La década de los sesenta, la del copo tecnocrático, nos trajo como importaciones precisas para el desarrollo anglicismos regeneradores. Entre ellos, a nivel de. Fue por esos años cuando prensas y balances de empresas y bancos empezaron a poblarse de tal hierba: “a nivel estatal”, “a nivel de dirección”, etc. (…) ¿A qué debe el triunfo tal tumorcillo? Seguramente al mito del cientificismo de ultranza. Para los planificadores desarrollistas a nivel de es un modo de traducir al lenguaje su abstracto artilugio ordenador.

Hemos detectado un caso en que se utiliza al galicismo “a nivel + adj.” Aunque su uso es cada vez más generalizado nos detendremos a analizar si esta forma es correcta o no.

Versión publicada en español

k) la posibilidad de desarrollar parámetros válidos a nivel comunitario como base para la asignación de derechos de emisión

Según el Diccionario panhispánico de dudas, el significado básico del sustantivo nivel es ‘altura’ y, en sentido figurado, ‘categoría o rango’. Se usa con frecuencia en la locución a(l) nivel de, que significa, propiamente, ‘a la altura de’. Cuando se refiere a altura física, es más normal el uso con artículo (al nivel de) que sin él (a nivel de), aunque se dan ambos. Hoy se ha extendido enormemente el uso figurado de a nivel de + sustantivo, así como el de a nivel + adjetivo. Ambas construcciones son admisibles siempre que en ellas la palabra nivel conserve de algún modo la noción de ‘altura’ o de ‘categoría u orden jerárquico’. Por el contrario, la lengua cuidada rechaza su empleo cuando no está presente ninguna de estas nociones y se emplea, indebidamente, con los sentidos de ‘con respecto a’, ‘en el ámbito de’, ‘entre’ o, simplemente, ‘en’. En nuestro caso se trata del significado “en la Comunidad”, por lo que “a nivel comunitario” no sería la forma más apropiada.

3.2.5 Uso de Shall (en)
Hemos recogido la siguiente información del Artículo nº 3 (Una cultura jurídica común. ¿Ficción o realidad?) del vademécum del traductor externo, escrito por Edward Seymour.
El uso de esta forma se remonta a los primeros textos escritos en inglés y ciertamente a su uso más famoso en la Biblia del Rey Jacobo de 1611 y, con anterioridad, a la traducción de los Diez Mandamientos que hizo William Tyndale en 1530. Los autores de textos jurídicos en inglés se han esforzado por utilizar shall de forma adecuada, confundidos no sólo por las dudas que se les planteaban a la hora de definir qué es un texto jurídico, sino también por las interferencias con la forma correcta del futuro en inglés: «I shall, you will, she will, we shall, you will, they will», sin olvidarse de la preferencia generalizada en el inglés vernáculo por las contracciones «I’ll, you’ll, they’ll», etcétera. En una conferencia sobre traducción jurídica celebrada en Ginebra en febrero de 2000, uno de los ponentes citó el siguiente mantra, que a muchos británicos nos trae a la memoria nuestros días de escuela, como recordatorio de la distinción entre shall con valor de futuro y shall en sentido jurídico:

«I shall drown, and no one will save me» (me ahogaré y nadie me salvará)
«I will drown, and no one shall save me» (es mi intención ahogarme, y nadie debe hacer nada para salvarme).

¿Cuál es la convención cultural equivalente en las demás lenguas de la UE? En la GPC se establece la norma:

En la parte dispositiva de los actos de carácter vinculante, los verbos se emplearán en francés en presente de indicativo, mientras que la fórmula utilizada generalmente en inglés será «shall» seguido de infinitivo. En ambas lenguas debe evitarse el futuro en la medida de lo posible. En cambio, el uso del futuro normativo en castellano es preceptivo.

3.2.6 Fraseología
Los presentes textos presentan una característica particular que es el empleo de _locuciones preposicionales_ complejas, muchas con la estructura P + N + P. El traductor debe saber cómo se pueden traducir para mantener el lenguaje jurídico. A veces hay más de una posibilidad de traducción, por ejemplo “pursuant to” puede ser “con arreglo a” o “en virtud de”, lo importante es mantener el sentido.
- For the purposes of/ A efectos de:
  For the purposes of this Directive the following definitions shall apply:
  A efectos de la presente Directiva serán de aplicación las siguientes definiciones:

- In respect of/ respecto a:
  Council Decision 93/389/EEC of 24 June 1993 for a monitoring mechanism of Community CO2 and other greenhouse gas emissions(8), established a mechanism for monitoring greenhouse gas emissions and evaluating progress towards meeting commitments in respect of these emissions.
  (6) La Decisión 93/389/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1993, relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad(8), ha establecido un mecanismo de seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de evaluación del progreso en el cumplimiento de los compromisos respecto a dichas emisiones.

- In accordance with/ de conformidad con:
  The inclusion of additional installations in the Community scheme should be in accordance with the provisions laid down in this Directive
  La inclusión de instalaciones adicionales en el régimen comunitario debe ser conforme a las disposiciones de la presente Directiva

- Pursuant to/en virtud de:
  2. This Directive shall apply without prejudice to any requirements pursuant to Directive 96/61/EC.
  2. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de cualquier requisito en virtud de la Directiva 96/61/CE.

Por otra parte, uno de los rasgos distintivos del lenguaje jurídico inglés es el uso de las preposiciones sufiijadas, que han desaparecido casi totalmente del resto de registros de esta lengua. (Borja, 2007: 138) Puesto que en español no existen este tipo de preposiciones el traductor debe saber que tiene que parafrasear. A continuación enumeramos las preposiciones acompañadas de un ejemplo en inglés con su traducción.
- Thereof:

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 175(1) thereof,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 de su artículo 175,

- Thereby:

The inclusion of additional installations in the Community scheme should be in accordance with the provisions laid down in this Directive, and the coverage of the Community scheme may thereby be extended to emissions of greenhouse gases

La inclusión de instalaciones adicionales en el régimen comunitario debe ser conforme a las disposiciones de la presente Directiva, y, por consiguiente, la cobertura del régimen comunitario se puede ampliar a las emisiones de gases de efecto invernadero

- Thereunder:

The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (7), will commit the Community

del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo (7) comprometerá a la Comunidad

- Hereinafter:

greenhouse gas emission allowance trading within the Community (hereinafter referred to as the "Community scheme")

régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el interior de la Comunidad, denominado en lo sucesivo el "régimen comunitario"

Thereeto:

(17) Member States may participate in international emissions trading as Parties to the Kyoto Protocol with any other Party included in Annex B thereto.

(17) Los Estados miembros pueden participar en regímenes internacionales de derechos de emisión, como Partes del Protocolo de Kioto, con cualquier otra Parte incluida en su anexo B.
Todos estos elementos forman parte de lo que llamamos el lenguaje de derecho como especialidad. Y el principio de la lengua de especialidad es de los más simples: cada campo posee su lengua, su manera de pensar las cosas y las palabras con las que expresarlas. (Borja, 2005:43)

3.2.7 Uso de mayúsculas
Es importante aclarar la cuestión del uso de las mayúsculas porque existe una divergencia entre el inglés y el español. En el primero se utilizan mucho más y a veces su uso es obligatorio, como es el caso de los días de la semana o los meses, que en español van en minúscula. Ahora nos interesa saber qué pasa con los instrumentos y actos jurídicos. En la Guía de Principiante se detalla su uso:

**Actos jurídicos**
La denominación de los instrumentos jurídicos y actos asimilables, cuando se refieran a un texto concreto:
- Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Carta Social Europea
Los términos reglamento, Directiva, decisión, posición común, resolución, recomendación, etc. se escribirán siempre con mayúscula, cuando se trate de actos concretos, adoptados o aprobados, que se citen por su título completo, su título abreviado, su denominación habitual, su fecha o su número:
- Directiva sobre máquinas
- Directiva sobre aves silvestres
- Posición Común [...] con vistas a la adopción del Reglamento [...] 
- Reglamento Financiero
- Reglamento (del PE)

Aunque la inicial mayúscula debe reservarse para actos concretos como los citados en los ejemplos, es conveniente, para ajustarse a los usos del Consejo y de la Comisión, que en las enmiendas incluidas en las propuestas legislativas términos como Directiva, reglamento o decisión se escriban con inicial mayúscula en las expresiones:
- la presente Directiva,
- el presente Reglamento.
4. CONCLUSIONES

Rasgos característicos de la Directiva
En líneas generales podemos decir que el léxico en ambas versiones publicadas es preciso y no se presta a confusión; tal es el ejemplo de *cost-effective*, traducido por *eficaz en relación con el coste*. En la traducción, se ha procurado mantener una homogeneidad, es decir, no se han utilizado sinónimos para expresar una misma idea. Esto facilita la tarea de los responsables de las administraciones públicas encargados de transponer dicha norma al el derecho interno de los estados miembros.
Además, claramente podemos identificar un campo semántico que es el del derecho comunitario:

- Directiva
- Parlamento Europeo y Consejo
- EEE
- Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
- Dictamen
- Comisión
- Procedimiento establecido
- Libro Verde
- Unión Europea
- Programa Europeo sobre el Cambio Climático
- Medidas comunitarias
- Régimen comunitario
- La Comunidad
- Estados Miembros
- Protocolo de Kyoto
- Disposiciones comunitarias

El texto obedece a la estructura establecida por la Guía Práctica Común (GPC):
- Título
- Preámbulo (vistos y considerandos)
- Parte dispositiva (parte normativa- artículos)
- Anexos

Desde la perspectiva gramatical, el tiempo verbal utilizado en la parte dispositiva es el futuro, *shall* en inglés, puesto que se trata de un mandato de hacer con carácter obligatorio para los legisladores nacionales.
Método de traducción
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, podríamos argumentar que el traductor ha optado por un método muy cauteloso y ha pensado en los destinatarios de la Directiva.
Los traductores de la UE trabajan en unas condiciones muy particulares que supeditan su labor. Ésta se basa en reglas y convenciones. El traductor institucional debe velar por la corrección formal y la uniformidad de las distintas versiones lingüísticas; por lo tanto, se verá obligado a utilizar fórmulas que permitan reconocer de manera inequívoca expresiones jurídicas y administrativas equiparables en las distintas lenguas. Esta función normalizadora se refleja claramente en la metodología de los servicios de traducción: todos los traductores emplean documentos modelo para cada tipo de texto. (Vid. GPC en ANEXO 3)

El traductor debe lograr una coherencia interna que puede extenderse a cuestiones de detalle aparentemente ními: uso de mayúsculas y minúsculas, elección entre variantes topónimicas, transcripción de antropónimos o escritura de fechas. En caso de duda existen los boletines terminológicos y normativos que se publican en el Vademécum del traductor externo.

Aspectos que pueden mejorararse
Muy probablemente el traductor se esforzó por lograr un equilibrio entre la sencillez y la precisión gramatical. No obstante, podrían corregirse algunas formas como “a nivel comunitario”, que si bien su uso se ha extendido, en el lenguaje culto no es aceptado. Además, se debería corregir el uso del pretérito perfecto cuando la forma más apropiada es el pretérito indefinido y, ahondando en matices, es más preciso decir “incumplir una obligación” que “infringir una obligación”.

Multilingüismo
El traductor de la Directiva se encuentra en un sistema multicultural y multilingüe. Para la integración europea es necesario mantener la diversidad de lenguas, mejor dicho, la equivalencia jurídica de las lenguas oficiales. El artículo 4 del Reglamento nº 1 del Consejo establece que los actos del llamado derecho derivado (reglamentos, Directivas, etc.) “se redactarán” en todas las lenguas oficiales. (Borja, 2005: 203)
El principio de un multilingüismo basado en la igualdad de trato entre las distintas lenguas oficiales sería impensable sin la ficción o la convención de que los textos en las distintas lenguas son plenamente equivalentes. Un documento institucional nunca será juzgado como traducción; tiene valor propio en cada lengua y, por lo tanto, debe ser correcto, desde el doble punto de vista del contenido y de la sintaxis, en cada lengua.

Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el original y cuáles son las traducciones? El inglés y el francés, sirven generalmente como vehículos de comunicación y negociación. En ellas se expresa la Administración interna y se redactan los documentos de los órganos de gobierno. (Guía del traductor Principiante, 2005) Así, pues, nos hemos referido a la versión en inglés como el original y la versión en español como una traducción, aunque paradójicamente en el marco jurídico de la UE la traducción no existe.

Como dijo Brian Fox (de la Dirección General de interpretación de la Comisión Europea) en la conferencia “Languages in Europe, Europe in languages” que tuvo lugar en la UPF, podríamos comprar la diversidad lingüística en la Europa contemporánea con el relato bíblico de la Torre de Babel. Pero así como este último ejemplo representaba debilitamiento, confusión y caos ocasionado por el hecho de hablar diferentes lenguas, al contrario, podríamos decir que la UE funciona porque cada uno habla su propia lengua. La diversidad es la fuerza.

Propuestas para el futuro

La UE comenzó siendo una pequeña organización y se convirtió en una potencia mundial. Probablemente sus fundadores no imaginaron que alcanzaría esta magnitud. Se han realizado muchos estudios sobre la UE pero a medida que aumentan los Estados miembros hay más aspectos lingüísticos que se pueden tratar. La UE da lugar a muchas investigaciones, que por motivo de espacio no podemos abordar en el presente trabajo. Los boletines normativos son muy útiles, así que, ¿por qué no hacer un boletín que incluya algunas de las cuestiones que aún no están aclaradas?

Las traducciones de “cost-effective” son diversas y se podrían establecer propuestas de traducción como se ha hecho con otros términos. Y en el ámbito de emisiones de gases de efecto invernadero nos encontraremos con el “protocolo de KYOTO o KIOTO”
muchas veces. Ambas formas se utilizan en la UE, pero ¿por qué no establecer una sola forma en español? A partir de este trabajo invitamos a todos los lectores a reflexionar sobre estos aspectos y principalmente sobre la siguiente cuestión: ¿Existe o existirá realmente la “eurolalia”, el lenguaje propio de la UE?
5. BIBLIOGRAFÍA

**Manuales**


**Diccionarios**


Otros recursos en línea


Punto y Coma, el boletín de los traductores españoles de las instituciones de la Unión Europea.

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 175(1) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission(1),

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee(2),

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions(3),

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty(4),

Whereas:

(1) The Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union launched a debate across Europe on the suitability and possible functioning of greenhouse gas emissions trading within the European Union. The European Climate Change Programme has considered Community policies and measures through a multi-stakeholder process, including a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community (the Community scheme) based on the Green Paper. In its Conclusions of 8 March 2001, the Council recognised the particular importance of the European Climate Change Programme and of work based on the Green Paper, and underlined the urgent need for concrete action at Community level.

(2) The Sixth Community Environment Action Programme established by Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council(5) identifies climate change as a priority for action and provides for the establishment of a Community-wide emissions trading scheme by 2005. That Programme recognises that the Community is committed to achieving an 8 % reduction in emissions of greenhouse gases by 2008 to 2012 compared to 1990 levels, and that, in the longer-term, global emissions of...
greenhouse gases will need to be reduced by approximately 70% compared to 1990 levels.

(3) The ultimate objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change, which was approved by Council Decision 94/69/EC of 15 December 1993 concerning the conclusion of the United Nations Framework Convention on Climate Change(6), is to achieve stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level which prevents dangerous anthropogenic interference with the climate system.

(4) Once it enters into force, the Kyoto Protocol, which was approved by Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder(7), will commit the Community and its Member States to reducing their aggregate anthropogenic emissions of greenhouse gases listed in Annex A to the Protocol by 8% compared to 1990 levels in the period 2008 to 2012.

(5) The Community and its Member States have agreed to fulfil their commitments to reduce anthropogenic greenhouse gas emissions under the Kyoto Protocol jointly, in accordance with Decision 2002/358/EC. This Directive aims to contribute to fulfilling the commitments of the European Community and its Member States more effectively, through an efficient European market in greenhouse gas emission allowances, with the least possible diminution of economic development and employment.

(6) Council Decision 93/389/EEC of 24 June 1993 for a monitoring mechanism of Community CO2 and other greenhouse gas emissions(8), established a mechanism for monitoring greenhouse gas emissions and evaluating progress towards meeting commitments in respect of these emissions. This mechanism will assist Member States in determining the total quantity of allowances to allocate.

(7) Community provisions relating to allocation of allowances by the Member States are necessary to contribute to preserving the integrity of the internal market and to avoid distortions of competition.

(8) Member States should have regard when allocating allowances to the potential for industrial process activities to reduce emissions.

(9) Member States may provide that they only issue allowances valid for a five-year period beginning in 2008 to persons in respect of allowances cancelled, corresponding
to emission reductions made by those persons on their national territory during a three-year period beginning in 2005.

(10) Starting with the said five-year period, transfers of allowances to another Member State will involve corresponding adjustments of assigned amount units under the Kyoto Protocol.

(11) Member States should ensure that the operators of certain specified activities hold a greenhouse gas emissions permit and that they monitor and report their emissions of greenhouse gases specified in relation to those activities.

(12) Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of this Directive and ensure that they are implemented. Those penalties must be effective, proportionate and dissuasive.

(13) In order to ensure transparency, the public should have access to information relating to the allocation of allowances and to the results of monitoring of emissions, subject only to restrictions provided for in Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information(9).


(15) The inclusion of additional installations in the Community scheme should be in accordance with the provisions laid down in this Directive, and the coverage of the Community scheme may thereby be extended to emissions of greenhouse gases other than carbon dioxide, inter alia from aluminium and chemicals activities.

(16) This Directive should not prevent any Member State from maintaining or establishing national trading schemes regulating emissions of greenhouse gases from activities other than those listed in Annex I or included in the Community scheme, or from installations temporarily excluded from the Community scheme.

(17) Member States may participate in international emissions trading as Parties to the Kyoto Protocol with any other Party included in Annex B thereto.

(18) Linking the Community scheme to greenhouse gas emission trading schemes in third countries will increase the cost-effectiveness of achieving the Community emission reductions target as laid down in Decision 2002/358/EC on the joint fulfilment of commitments.
Project-based mechanisms including Joint Implementation (JI) and the Clean Development Mechanism (CDM) are important to achieve the goals of both reducing global greenhouse gas emissions and increasing the cost-effective functioning of the Community scheme. In accordance with the relevant provisions of the Kyoto Protocol and Marrakech Accords, the use of the mechanisms should be supplemental to domestic action and domestic action will thus constitute a significant element of the effort made.

This Directive will encourage the use of more energy-efficient technologies, including combined heat and power technology, producing less emissions per unit of output, while the future directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of cogeneration based on useful heat demand in the internal energy market will specifically promote combined heat and power technology.

Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control establishes a general framework for pollution prevention and control, through which greenhouse gas emissions permits may be issued. Directive 96/61/EC should be amended to ensure that emission limit values are not set for direct emissions of greenhouse gases from an installation subject to this Directive and that Member States may choose not to impose requirements relating to energy efficiency in respect of combustion units or other units emitting carbon dioxide on the site, without prejudice to any other requirements pursuant to Directive 96/61/EC.

This Directive is compatible with the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. It should be reviewed in the light of developments in that context and to take into account experience in its implementation and progress achieved in monitoring of emissions of greenhouse gases.

Emission allowance trading should form part of a comprehensive and coherent package of policies and measures implemented at Member State and Community level. Without prejudice to the application of Articles 87 and 88 of the Treaty, where activities are covered by the Community scheme, Member States may consider the implications of regulatory, fiscal or other policies that pursue the same objectives. The review of the Directive should consider the extent to which these objectives have been attained.

The instrument of taxation can be a national policy to limit emissions from installations temporarily excluded.

Policies and measures should be implemented at Member State and Community level across all sectors of the European Union economy, and not only within the industry and energy sectors, in order to generate substantial emissions reductions. The
Commission should, in particular, consider policies and measures at Community level in order that the transport sector makes a substantial contribution to the Community and its Member States meeting their climate change obligations under the Kyoto Protocol.

(26) Notwithstanding the multifaceted potential of market-based mechanisms, the European Union strategy for climate change mitigation should be built on a balance between the Community scheme and other types of Community, domestic and international action.

(27) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

(28) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission(12).

(29) As the criteria (1), (5) and (7) of Annex III cannot be amended through comitology, amendments in respect of periods after 2012 should only be made through codecision.

(30) Since the objective of the proposed action, the establishment of a Community scheme, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting individually, and can therefore by reason of the scale and effects of the proposed action be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1
Subject matter

This Directive establishes a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community (hereinafter referred to as the "Community scheme") in order to promote reductions of greenhouse gas emissions in a cost-effective and economically efficient manner.

Article 2
Scope

1. This Directive shall apply to emissions from the activities listed in Annex I and greenhouse gases listed in Annex II.

2. This Directive shall apply without prejudice to any requirements pursuant to Directive 96/61/EC.
Article 3
Definitions
For the purposes of this Directive the following definitions shall apply:
(a) "allowance" means an allowance to emit one tonne of carbon dioxide equivalent during a specified period, which shall be valid only for the purposes of meeting the requirements of this Directive and shall be transferable in accordance with the provisions of this Directive;
(b) "emissions" means the release of greenhouse gases into the atmosphere from sources in an installation;
(c) "greenhouse gases" means the gases listed in Annex II;
(d) "greenhouse gas emissions permit" means the permit issued in accordance with Articles 5 and 6;
(e) "installation" means a stationary technical unit where one or more activities listed in Annex I are carried out and any other directly associated activities which have a technical connection with the activities carried out on that site and which could have an effect on emissions and pollution;
(f) "operator" means any person who operates or controls an installation or, where this is provided for in national legislation, to whom decisive economic power over the technical functioning of the installation has been delegated;
(g) "person" means any natural or legal person;
(h) "new entrant" means any installation carrying out one or more of the activities indicated in Annex I, which has obtained a greenhouse gas emissions permit or an update of its greenhouse gas emissions permit because of a change in the nature or functioning or an extension of the installation, subsequent to the notification to the Commission of the national allocation plan;
(i) "the public" means one or more persons and, in accordance with national legislation or practice, associations, organisations or groups of persons;
(j) "tonne of carbon dioxide equivalent" means one metric tonne of carbon dioxide (CO2) or an amount of any other greenhouse gas listed in Annex II with an equivalent global-warming potential.

Article 4
Greenhouse gas emissions permits
Member States shall ensure that, from 1 January 2005, no installation undertakes any activity listed in Annex I resulting in emissions specified in relation to that activity
unless its operator holds a permit issued by a competent authority in accordance with Articles 5 and 6, or the installation is temporarily excluded from the Community scheme pursuant to Article 27.

Article 5
Applications for greenhouse gas emissions permits
An application to the competent authority for a greenhouse gas emissions permit shall include a description of:
(a) the installation and its activities including the technology used;
(b) the raw and auxiliary materials, the use of which is likely to lead to emissions of gases listed in Annex I;
(c) the sources of emissions of gases listed in Annex I from the installation; and
(d) the measures planned to monitor and report emissions in accordance with the guidelines adopted pursuant to Article 14.
The application shall also include a non-technical summary of the details referred to in the first subparagraph.

Article 6
Conditions for and contents of the greenhouse gas emissions permit
1. The competent authority shall issue a greenhouse gas emissions permit granting authorisation to emit greenhouse gases from all or part of an installation if it is satisfied that the operator is capable of monitoring and reporting emissions.
A greenhouse gas emissions permit may cover one or more installations on the same site operated by the same operator.
2. Greenhouse gas emissions permits shall contain the following:
(a) the name and address of the operator;
(b) a description of the activities and emissions from the installation;
(c) monitoring requirements, specifying monitoring methodology and frequency;
(d) reporting requirements; and
(e) an obligation to surrender allowances equal to the total emissions of the installation in each calendar year, as verified in accordance with Article 15, within four months following the end of that year.

Article 7
Changes relating to installations
The operator shall inform the competent authority of any changes planned in the nature or functioning, or an extension, of the installation which may require updating of the
greenhouse gas emissions permit. Where appropriate, the competent authority shall update the permit. Where there is a change in the identity of the installation's operator, the competent authority shall update the permit to include the name and address of the new operator.

Article 8
Coordination with Directive 96/61/EC
Member States shall take the necessary measures to ensure that, where installations carry out activities that are included in Annex I to Directive 96/61/EC, the conditions of, and procedure for, the issue of a greenhouse gas emissions permit are coordinated with those for the permit provided for in that Directive. The requirements of Articles 5, 6 and 7 of this Directive may be integrated into the procedures provided for in Directive 96/61/EC.

Article 9
National allocation plan
1. For each period referred to in Article 11(1) and (2), each Member State shall develop a national plan stating the total quantity of allowances that it intends to allocate for that period and how it proposes to allocate them. The plan shall be based on objective and transparent criteria, including those listed in Annex III, taking due account of comments from the public. The Commission shall, without prejudice to the Treaty, by 31 December 2003 at the latest develop guidance on the implementation of the criteria listed in Annex III.

For the period referred to in Article 11(1), the plan shall be published and notified to the Commission and to the other Member States by 31 March 2004 at the latest. For subsequent periods, the plan shall be published and notified to the Commission and to the other Member States at least 18 months before the beginning of the relevant period.

2. National allocation plans shall be considered within the committee referred to in Article 23(1).

3. Within three months of notification of a national allocation plan by a Member State under paragraph 1, the Commission may reject that plan, or any aspect thereof, on the basis that it is incompatible with the criteria listed in Annex III or with Article 10. The Member State shall only take a decision under Article 11(1) or (2) if proposed amendments are accepted by the Commission. Reasons shall be given for any rejection decision by the Commission.

Article 10
Method of allocation
For the three-year period beginning 1 January 2005 Member States shall allocate at least 95 % of the allowances free of charge. For the five-year period beginning 1 January 2008, Member States shall allocate at least 90 % of the allowances free of charge.

Article 11
Allocation and issue of allowances
1. For the three-year period beginning 1 January 2005, each Member State shall decide upon the total quantity of allowances it will allocate for that period and the allocation of those allowances to the operator of each installation. This decision shall be taken at least three months before the beginning of the period and be based on its national allocation plan developed pursuant to Article 9 and in accordance with Article 10, taking due account of comments from the public.
2. For the five-year period beginning 1 January 2008, and for each subsequent five-year period, each Member State shall decide upon the total quantity of allowances it will allocate for that period and initiate the process for the allocation of those allowances to the operator of each installation. This decision shall be taken at least 12 months before the beginning of the relevant period and be based on the Member State's national allocation plan developed pursuant to Article 9 and in accordance with Article 10, taking due account of comments from the public.
3. Decisions taken pursuant to paragraph 1 or 2 shall be in accordance with the requirements of the Treaty, in particular Articles 87 and 88 thereof. When deciding upon allocation, Member States shall take into account the need to provide access to allowances for new entrants.
4. The competent authority shall issue a proportion of the total quantity of allowances each year of the period referred to in paragraph 1 or 2, by 28 February of that year.

Article 12
Transfer, surrender and cancellation of allowances
1. Member States shall ensure that allowances can be transferred between:
   (a) persons within the Community;
   (b) persons within the Community and persons in third countries, where such allowances are recognised in accordance with the procedure referred to in Article 25 without restrictions other than those contained in, or adopted pursuant to, this Directive.
2. Member States shall ensure that allowances issued by a competent authority of another Member State are recognised for the purpose of meeting an operator's obligations under paragraph 3.

3. Member States shall ensure that, by 30 April each year at the latest, the operator of each installation surrenders a number of allowances equal to the total emissions from that installation during the preceding calendar year as verified in accordance with Article 15, and that these are subsequently cancelled.

4. Member States shall take the necessary steps to ensure that allowances will be cancelled at any time at the request of the person holding them.

Article 13
Validity of allowances
1. Allowances shall be valid for emissions during the period referred to in Article 11(1) or (2) for which they are issued.

2. Four months after the beginning of the first five-year period referred to in Article 11(2), allowances which are no longer valid and have not been surrendered and cancelled in accordance with Article 12(3) shall be cancelled by the competent authority.

Member States may issue allowances to persons for the current period to replace any allowances held by them which are cancelled in accordance with the first subparagraph.

3. Four months after the beginning of each subsequent five-year period referred to in Article 11(2), allowances which are no longer valid and have not been surrendered and cancelled in accordance with Article 12(3) shall be cancelled by the competent authority.

Member States shall issue allowances to persons for the current period to replace any allowances held by them which are cancelled in accordance with the first subparagraph.

Article 14
Guidelines for monitoring and reporting of emissions
1. The Commission shall adopt guidelines for monitoring and reporting of emissions resulting from the activities listed in Annex I of greenhouse gases specified in relation to those activities, in accordance with the procedure referred to in Article 23(2), by 30 September 2003. The guidelines shall be based on the principles for monitoring and reporting set out in Annex IV.

2. Member States shall ensure that emissions are monitored in accordance with the guidelines.
3. Member States shall ensure that each operator of an installation reports the emissions from that installation during each calendar year to the competent authority after the end of that year in accordance with the guidelines.

Article 15
Verification
Member States shall ensure that the reports submitted by operators pursuant to Article 14(3) are verified in accordance with the criteria set out in Annex V, and that the competent authority is informed thereof.
Member States shall ensure that an operator whose report has not been verified as satisfactory in accordance with the criteria set out in Annex V by 31 March each year for emissions during the preceding year cannot make further transfers of allowances until a report from that operator has been verified as satisfactory.

Article 16
Penalties
1. Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary to ensure that such rules are implemented. The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive. Member States shall notify these provisions to the Commission by 31 December 2003 at the latest, and shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them.

2. Member States shall ensure publication of the names of operators who are in breach of requirements to surrender sufficient allowances under Article 12(3).

3. Member States shall ensure that any operator who does not surrender sufficient allowances by 30 April of each year to cover its emissions during the preceding year shall be held liable for the payment of an excess emissions penalty. The excess emissions penalty shall be EUR 100 for each tonne of carbon dioxide equivalent emitted by that installation for which the operator has not surrendered allowances. Payment of the excess emissions penalty shall not release the operator from the obligation to surrender an amount of allowances equal to those excess emissions when surrendering allowances in relation to the following calendar year.

4. During the three-year period beginning 1 January 2005, Member States shall apply a lower excess emissions penalty of EUR 40 for each tonne of carbon dioxide equivalent emitted by that installation for which the operator has not surrendered allowances. Payment of the excess emissions penalty shall not release the operator from the
obligation to surrender an amount of allowances equal to those excess emissions when surrendering allowances in relation to the following calendar year.

Article 17
Access to information
Decisions relating to the allocation of allowances and the reports of emissions required under the greenhouse gas emissions permit and held by the competent authority shall be made available to the public by that authority subject to the restrictions laid down in Article 3(3) and Article 4 of Directive 2003/4/EC.

Article 18
Competent authority
Member States shall make the appropriate administrative arrangements, including the designation of the appropriate competent authority or authorities, for the implementation of the rules of this Directive. Where more than one competent authority is designated, the work of these authorities undertaken pursuant to this Directive must be coordinated.

Article 19
Registries
1. Member States shall provide for the establishment and maintenance of a registry in order to ensure the accurate accounting of the issue, holding, transfer and cancellation of allowances. Member States may maintain their registries in a consolidated system, together with one or more other Member States.
2. Any person may hold allowances. The registry shall be accessible to the public and shall contain separate accounts to record the allowances held by each person to whom and from whom allowances are issued or transferred.
3. In order to implement this Directive, the Commission shall adopt a Regulation in accordance with the procedure referred to in Article 23(2) for a standardised and secured system of registries in the form of standardised electronic databases containing common data elements to track the issue, holding, transfer and cancellation of allowances, to provide for public access and confidentiality as appropriate and to ensure that there are no transfers incompatible with obligations resulting from the Kyoto Protocol.

Article 20
Central Administrator
1. The Commission shall designate a Central Administrator to maintain an independent transaction log recording the issue, transfer and cancellation of allowances.

2. The Central Administrator shall conduct an automated check on each transaction in registries through the independent transaction log to ensure there are no irregularities in the issue, transfer and cancellation of allowances.

3. If irregularities are identified through the automated check, the Central Administrator shall inform the Member State or Member States concerned who shall not register the transactions in question or any further transactions relating to the allowances concerned until the irregularities have been resolved.

Article 21
Reporting by Member States

1. Each year the Member States shall submit to the Commission a report on the application of this Directive. This report shall pay particular attention to the arrangements for the allocation of allowances, the operation of registries, the application of the monitoring and reporting guidelines, verification and issues relating to compliance with the Directive and on the fiscal treatment of allowances, if any. The first report shall be sent to the Commission by 30 June 2005. The report shall be drawn up on the basis of a questionnaire or outline drafted by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 6 of Directive 91/692/EEC. The questionnaire or outline shall be sent to Member States at least six months before the deadline for the submission of the first report.

2. On the basis of the reports referred to in paragraph 1, the Commission shall publish a report on the application of this Directive within three months of receiving the reports from the Member States.

3. The Commission shall organise an exchange of information between the competent authorities of the Member States concerning developments relating to issues of allocation, the operation of registries, monitoring, reporting, verification and compliance.

Article 22
Amendments to Annex III

The Commission may amend Annex III, with the exception of criteria (1), (5) and (7), for the period from 2008 to 2012 in the light of the reports provided for in Article 21 and of the experience of the application of this Directive, in accordance with the procedure referred to in Article 23(2).
Article 23
Committee
1. The Commission shall be assisted by the committee instituted by Article 8 of Decision 93/389/EEC.
2. Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months.
3. The Committee shall adopt its rules of procedure.

Article 24
Procedures for unilateral inclusion of additional activities and gases
1. From 2008, Member States may apply emission allowance trading in accordance with this Directive to activities, installations and greenhouse gases which are not listed in Annex I, provided that inclusion of such activities, installations and greenhouse gases is approved by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 23(2), taking into account all relevant criteria, in particular effects on the internal market, potential distortions of competition, the environmental integrity of the scheme and reliability of the planned monitoring and reporting system.
From 2005 Member States may under the same conditions apply emissions allowance trading to installations carrying out activities listed in Annex I below the capacity limits referred to in that Annex.
2. Allocations made to installations carrying out such activities shall be specified in the national allocation plan referred to in Article 9.
3. The Commission may, on its own initiative, or shall, on request by a Member State, adopt monitoring and reporting guidelines for emissions from activities, installations and greenhouse gases which are not listed in Annex I in accordance with the procedure referred to in Article 23(2), if monitoring and reporting of these emissions can be carried out with sufficient accuracy.
4. In the event that such measures are introduced, reviews carried out pursuant to Article 30 shall also consider whether Annex I should be amended to include emissions from these activities in a harmonised way throughout the Community.

Article 25
Links with other greenhouse gas emissions trading schemes
1. Agreements should be concluded with third countries listed in Annex B to the Kyoto Protocol which have ratified the Protocol to provide for the mutual recognition of allowances between the Community scheme and other greenhouse gas emissions trading schemes in accordance with the rules set out in Article 300 of the Treaty.

2. Where an agreement referred to in paragraph 1 has been concluded, the Commission shall draw up any necessary provisions relating to the mutual recognition of allowances under that agreement in accordance with the procedure referred to in Article 23(2).

Article 26
Amendment of Directive 96/61/EC
In Article 9(3) of Directive 96/61/EC the following subparagraphs shall be added: "Where emissions of a greenhouse gas from an installation are specified in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC(13) in relation to an activity carried out in that installation, the permit shall not include an emission limit value for direct emissions of that gas unless it is necessary to ensure that no significant local pollution is caused.

For activities listed in Annex I to Directive 2003/87/EC, Member States may choose not to impose requirements relating to energy efficiency in respect of combustion units or other units emitting carbon dioxide on the site.

Where necessary, the competent authorities shall amend the permit as appropriate.

The three preceding subparagraphs shall not apply to installations temporarily excluded from the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community in accordance with Article 27 of Directive 2003/87/EC."

Article 27
Temporary exclusion of certain installations
1. Member States may apply to the Commission for installations to be temporarily excluded until 31 December 2007 at the latest from the Community scheme. Any such application shall list each such installation and shall be published.

2. If, having considered any comments made by the public on that application, the Commission decides, in accordance with the procedure referred to in Article 23(2), that the installations will:

(a) as a result of national policies, limit their emissions as much as would be the case if they were subject to the provisions of this Directive;
(b) be subject to monitoring, reporting and verification requirements which are equivalent to those provided for pursuant to Articles 14 and 15; and
(c) be subject to penalties at least equivalent to those referred to in Article 16(1) and (4) in the case of non-fulfilment of national requirements;
it shall provide for the temporary exclusion of those installations from the Community scheme.
It must be ensured that there will be no distortion of the internal market.

Article 28

Pooling

1. Member States may allow operators of installations carrying out one of the activities listed in Annex I to form a pool of installations from the same activity for the period referred to in Article 11(1) and/or the first five-year period referred to in Article 11(2) in accordance with paragraphs 2 to 6 of this Article.

2. Operators carrying out an activity listed in Annex I who wish to form a pool shall apply to the competent authority, specifying the installations and the period for which they want the pool and supplying evidence that a trustee will be able to fulfil the obligations referred to in paragraphs 3 and 4.

3. Operators wishing to form a pool shall nominate a trustee:
(a) to be issued with the total quantity of allowances calculated by installation of the operators, by way of derogation from Article 11;
(b) to be responsible for surrendering allowances equal to the total emissions from installations in the pool, by way of derogation from Articles 6(2)(e) and 12(3); and
(c) to be restricted from making further transfers in the event that an operator's report has not been verified as satisfactory in accordance with the second paragraph of Article 15.

4. The trustee shall be subject to the penalties applicable for breaches of requirements to surrender sufficient allowances to cover the total emissions from installations in the pool, by way of derogation from Article 16(2), (3) and (4).

5. A Member State that wishes to allow one or more pools to be formed shall submit the application referred to in paragraph 2 to the Commission. Without prejudice to the Treaty, the Commission may within three months of receipt reject an application that does not fulfil the requirements of this Directive. Reasons shall be given for any such decision. In the case of rejection the Member State may only allow the pool to be formed if proposed amendments are accepted by the Commission.
6. In the event that the trustee fails to comply with penalties referred to in paragraph 4, each operator of an installation in the pool shall be responsible under Articles 12(3) and 16 in respect of emissions from its own installation.

Article 29

Force majeure

1. During the period referred to in Article 11(1), Member States may apply to the Commission for certain installations to be issued with additional allowances in cases of force majeure. The Commission shall determine whether force majeure is demonstrated, in which case it shall authorise the issue of additional and non-transferable allowances by that Member State to the operators of those installations.

2. The Commission shall, without prejudice to the Treaty, develop guidance to describe the circumstances under which force majeure is demonstrated, by 31 December 2003 at the latest.

Article 30

Review and further development

1. On the basis of progress achieved in the monitoring of emissions of greenhouse gases, the Commission may make a proposal to the European Parliament and the Council by 31 December 2004 to amend Annex I to include other activities and emissions of other greenhouse gases listed in Annex II.

2. On the basis of experience of the application of this Directive and of progress achieved in the monitoring of emissions of greenhouse gases and in the light of developments in the international context, the Commission shall draw up a report on the application of this Directive, considering:

(a) how and whether Annex I should be amended to include other relevant sectors, inter alia the chemicals, aluminium and transport sectors, activities and emissions of other greenhouse gases listed in Annex II, with a view to further improving the economic efficiency of the scheme;

(b) the relationship of Community emission allowance trading with the international emissions trading that will start in 2008;

(c) further harmonisation of the method of allocation (including auctioning for the time after 2012) and of the criteria for national allocation plans referred to in Annex III;

(d) the use of credits from project mechanisms;
(e) the relationship of emissions trading with other policies and measures implemented at Member State and Community level, including taxation, that pursue the same objectives;
(f) whether it is appropriate for there to be a single Community registry;
(g) the level of excess emissions penalties, taking into account, inter alia, inflation;
(h) the functioning of the allowance market, covering in particular any possible market disturbances;
(i) how to adapt the Community scheme to an enlarged European Union;
(j) pooling;
(k) the practicality of developing Community-wide benchmarks as a basis for allocation, taking into account the best available techniques and cost-benefit analysis.

The Commission shall submit this report to the European Parliament and the Council by 30 June 2006, accompanied by proposals as appropriate.

3. Linking the project-based mechanisms, including Joint Implementation (JI) and the Clean Development Mechanism (CDM), with the Community scheme is desirable and important to achieve the goals of both reducing global greenhouse gas emissions and increasing the cost-effective functioning of the Community scheme. Therefore, the emission credits from the project-based mechanisms will be recognised for their use in this scheme subject to provisions adopted by the European Parliament and the Council on a proposal from the Commission, which should apply in parallel with the Community scheme in 2005. The use of the mechanisms shall be supplemental to domestic action, in accordance with the relevant provisions of the Kyoto Protocol and Marrakesh Accords.

Article 31

Implementation

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 31 December 2003 at the latest. They shall forthwith inform the Commission thereof. The Commission shall notify the other Member States of these laws, regulations and administrative provisions. When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. The Commission shall inform the other Member States thereof.

Article 32
Entry into force
This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

Article 33
Addressees
This Directive is addressed to the Member States.

Done at Luxembourg, 13 October 2003.

For the European Parliament
The President
P. Cox
For the Council
The President
G. Alemanno
(2) OJ C 221, 17.9.2002, p. 27.
ANNEX I
CATEGORIES OF ACTIVITIES REFERRED TO IN ARTICLES 2(1), 3, 4, 14(1), 28 AND 30
1. Installations or parts of installations used for research, development and testing of new products and processes are not covered by this Directive.
2. The threshold values given below generally refer to production capacities or outputs. Where one operator carries out several activities falling under the same subheading in the same installation or on the same site, the capacities of such activities are added together.

>TABLE>

ANNEX II
GREENHOUSE GASES REFERRED TO IN ARTICLES 3 AND 30
Carbon dioxide (CO2)
Methane (CH4)
Nitrous Oxide (N2O)
Hydrofluorocarbons (HFCs)
Perfluorocarbons (PFCs)
Sulphur Hexafluoride (SF6)

ANNEX III
CRITERIA FOR NATIONAL ALLOCATION PLANS REFERRED TO IN ARTICLES 9, 22 AND 30
1. The total quantity of allowances to be allocated for the relevant period shall be consistent with the Member State's obligation to limit its emissions pursuant to Decision 2002/358/EC and the Kyoto Protocol, taking into account, on the one hand, the proportion of overall emissions that these allowances represent in comparison with emissions from sources not covered by this Directive and, on the other hand, national energy policies, and should be consistent with the national climate change programme. The total quantity of allowances to be allocated shall not be more than is likely to be needed for the strict application of the criteria of this Annex. Prior to 2008, the quantity shall be consistent with a path towards achieving or over-achieving each Member State's target under Decision 2002/358/EC and the Kyoto Protocol.
2. The total quantity of allowances to be allocated shall be consistent with assessments of actual and projected progress towards fulfilling the Member States' contributions to the Community's commitments made pursuant to Decision 93/389/EEC.
3. Quantities of allowances to be allocated shall be consistent with the potential, including the technological potential, of activities covered by this scheme to reduce emissions. Member States may base their distribution of allowances on average emissions of greenhouse gases by product in each activity and achievable progress in each activity.

4. The plan shall be consistent with other Community legislative and policy instruments. Account should be taken of unavoidable increases in emissions resulting from new legislative requirements.

5. The plan shall not discriminate between companies or sectors in such a way as to unduly favour certain undertakings or activities in accordance with the requirements of the Treaty, in particular Articles 87 and 88 thereof.

6. The plan shall contain information on the manner in which new entrants will be able to begin participating in the Community scheme in the Member State concerned.

7. The plan may accommodate early action and shall contain information on the manner in which early action is taken into account. Benchmarks derived from reference documents concerning the best available technologies may be employed by Member States in developing their National Allocation Plans, and these benchmarks can incorporate an element of accommodating early action.

8. The plan shall contain information on the manner in which clean technology, including energy efficient technologies, are taken into account.

9. The plan shall include provisions for comments to be expressed by the public, and contain information on the arrangements by which due account will be taken of these comments before a decision on the allocation of allowances is taken.

10. The plan shall contain a list of the installations covered by this Directive with the quantities of allowances intended to be allocated to each.

11. The plan may contain information on the manner in which the existence of competition from countries or entities outside the Union will be taken into account.

ANNEX IV

PRINCIPLES FOR MONITORING AND REPORTING REFERRED TO IN ARTICLE 14(1)

Monitoring of carbon dioxide emissions

Emissions shall be monitored either by calculation or on the basis of measurement.

Calculation

Calculations of emissions shall be performed using the formula:
Activity data $\times$ Emission factor $\times$ Oxidation factor

Activity data (fuel used, production rate etc.) shall be monitored on the basis of supply data or measurement.

Accepted emission factors shall be used. Activity-specific emission factors are acceptable for all fuels. Default factors are acceptable for all fuels except non-commercial ones (waste fuels such as tyres and industrial process gases). Seam-specific defaults for coal, and EU-specific or producer country-specific defaults for natural gas shall be further elaborated. IPCC default values are acceptable for refinery products. The emission factor for biomass shall be zero.

If the emission factor does not take account of the fact that some of the carbon is not oxidised, then an additional oxidation factor shall be used. If activity-specific emission factors have been calculated and already take oxidation into account, then an oxidation factor need not be applied.

Default oxidation factors developed pursuant to Directive 96/61/EC shall be used, unless the operator can demonstrate that activity-specific factors are more accurate.

A separate calculation shall be made for each activity, installation and for each fuel.

Measurement

Measurement of emissions shall use standardised or accepted methods, and shall be corroborated by a supporting calculation of emissions.

Monitoring of emissions of other greenhouse gases

Standardised or accepted methods shall be used, developed by the Commission in collaboration with all relevant stakeholders and adopted in accordance with the procedure referred to in Article 23(2).

Reporting of emissions

Each operator shall include the following information in the report for an installation:

A. Data identifying the installation, including:
   - Name of the installation;
   - Its address, including postcode and country;
   - Type and number of Annex I activities carried out in the installation;
   - Address, telephone, fax and email details for a contact person; and
   - Name of the owner of the installation, and of any parent company.

B. For each Annex I activity carried out on the site for which emissions are calculated:
   - Activity data;
   - Emission factors;
- Oxidation factors;
- Total emissions; and
- Uncertainty.

C. For each Annex I activity carried out on the site for which emissions are measured:
- Total emissions;
- Information on the reliability of measurement methods; and
- Uncertainty.

D. For emissions from combustion, the report shall also include the oxidation factor, unless oxidation has already been taken into account in the development of an activity-specific emission factor.

Member States shall take measures to coordinate reporting requirements with any existing reporting requirements in order to minimise the reporting burden on businesses.

ANNEX V
CRITERIA FOR VERIFICATION REFERRED TO IN ARTICLE 15

General Principles
1. Emissions from each activity listed in Annex I shall be subject to verification.
2. The verification process shall include consideration of the report pursuant to Article 14(3) and of monitoring during the preceding year. It shall address the reliability, credibility and accuracy of monitoring systems and the reported data and information relating to emissions, in particular:
   (a) the reported activity data and related measurements and calculations;
   (b) the choice and the employment of emission factors;
   (c) the calculations leading to the determination of the overall emissions; and
   (d) if measurement is used, the appropriateness of the choice and the employment of measuring methods.
3. Reported emissions may only be validated if reliable and credible data and information allow the emissions to be determined with a high degree of certainty. A high degree of certainty requires the operator to show that:
   (a) the reported data is free of inconsistencies;
   (b) the collection of the data has been carried out in accordance with the applicable scientific standards; and
   (c) the relevant records of the installation are complete and consistent.
4. The verifier shall be given access to all sites and information in relation to the subject of the verification.
5. The verifier shall take into account whether the installation is registered under the Community eco-management and audit scheme (EMAS).

Methodology

Strategic analysis

6. The verification shall be based on a strategic analysis of all the activities carried out in the installation. This requires the verifier to have an overview of all the activities and their significance for emissions.

Process analysis

7. The verification of the information submitted shall, where appropriate, be carried out on the site of the installation. The verifier shall use spot-checks to determine the reliability of the reported data and information.

Risk analysis

8. The verifier shall submit all the sources of emissions in the installation to an evaluation with regard to the reliability of the data of each source contributing to the overall emissions of the installation.

9. On the basis of this analysis the verifier shall explicitly identify those sources with a high risk of error and other aspects of the monitoring and reporting procedure which are likely to contribute to errors in the determination of the overall emissions. This especially involves the choice of the emission factors and the calculations necessary to determine the level of the emissions from individual sources. Particular attention shall be given to those sources with a high risk of error and the abovementioned aspects of the monitoring procedure.

10. The verifier shall take into consideration any effective risk control methods applied by the operator with a view to minimising the degree of uncertainty.

Report

11. The verifier shall prepare a report on the validation process stating whether the report pursuant to Article 14(3) is satisfactory. This report shall specify all issues relevant to the work carried out. A statement that the report pursuant to Article 14(3) is satisfactory may be made if, in the opinion of the verifier, the total emissions are not materially misstated.

Minimum competency requirements for the verifier

12. The verifier shall be independent of the operator, carry out his activities in a sound and objective professional manner, and understand:
(a) the provisions of this Directive, as well as relevant standards and guidance adopted
by the Commission pursuant to Article 14(1);
(b) the legislative, regulatory, and administrative requirements relevant to the activities
being verified; and
(c) the generation of all information related to each source of emissions in the
installation, in particular, relating to the collection, measurement, calculation and
reporting of data.
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 13 de octubre de 2003
por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 de su artículo 175,
Vista la propuesta de la Comisión(1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4),
Considerando lo siguiente:

(1) El Libro Verde sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea abrió un debate europeo sobre la conveniencia y el posible funcionamiento del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. El Programa Europeo sobre el Cambio Climático, en un proceso en el que han participado las diversas partes interesadas, ha examinado las políticas y medidas comunitarias, incluido un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (el régimen comunitario) basado en el Libro Verde. En sus conclusiones de 8 de marzo de 2001, el Consejo reconoció la gran importancia del Programa Europeo sobre el Cambio Climático y del trabajo basado en el Libro Verde, y ha señalado la necesidad urgente de acciones comunitarias concretas.

(2) El Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente establecido mediante la Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(5) define el cambio climático como una prioridad de acción y contempla el establecimiento de un régimen comunitario de comercio de derechos de emisión para 2005. Este Programa reconoce que la Comunidad se ha comprometido a conseguir una reducción del 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para el período comprendido entre 2008 y 2012 respecto a los niveles de 1990 y que a más largo plazo...
las emisiones mundiales de estos gases tendrán que disminuir aproximadamente un 70 % respecto a los niveles de 1990.

(3) El objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada mediante la Decisión 94/69/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1993, relativa a la celebración de la Convención Marco sobre el Cambio Climático(6), es lograr una estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.

(4) Una vez que entre en vigor, el Protocolo de Kioto, aprobado por la Decisión 2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo(7) comprometerá a la Comunidad y a sus Estados miembros a reducir sus emisiones antropógénicas globales de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A del Protocolo en un 8 % respecto a los niveles de 1990 en el período comprendido entre 2008 y 2012.

(5) La Comunidad y sus Estados miembros han acordado cumplir conjuntamente sus compromisos de reducir las emisiones antropógénicas de gases de efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kioto de conformidad con la Decisión 2002/358/CE. La presente Directiva pretende contribuir a que se cumplan en mayor medida los compromisos de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, mediante un mercado europeo de derechos de emisión de gases de efecto invernadero eficaz y con el menor perjuicio posible para el desarrollo económico y la situación del empleo.

(6) La Decisión 93/389/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1993, relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad(8), ha establecido un mecanismo de seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de evaluación del progreso en el cumplimiento de los compromisos respecto a dichas emisiones. Este mecanismo ayudará a los Estados miembros a determinar la cuota total de derechos de emisión que deben asignar.

(7) Las disposiciones comunitarias sobre la asignación de derechos de emisión por los Estados miembros son necesarias para contribuir a mantener la integridad del mercado interior y evitar distorsiones de la competencia.
(8) Al asignar los derechos de emisión, los Estados miembros deben tener en cuenta el potencial de reducción de las emisiones de los procesos industriales.

(9) Los Estados miembros pueden establecer que sólo expedirán a personas derechos de emisión, válidos para un periodo de cinco años comenzando en 2008, respecto de derechos de emisión cancelados, que correspondan a reducciones de emisiones realizadas por dichas personas en su territorio nacional durante un período de tres años comenzando en 2005.

(10) A partir de dicho periodo de cinco años las transferencias de derechos de emisión a otro Estado miembro han de conllevar los correspondientes ajustes de las unidades de cantidad atribuida con arreglo al Protocolo de Kioto.

(11) Los Estados miembros deben asegurarse de que los titulares de determinadas actividades especificadas dispongan de un permiso de emisión de gases de efecto invernadero y controlen y notifiquen las emisiones de gases de efecto invernadero especificados en relación con esas actividades.

(12) Los Estados miembros deben fijar normas sobre sanciones aplicables a las infracciones de la presente Directiva y velar por su ejecución. Dichas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(13) Para garantizar la transparencia, el público debe tener acceso a la información sobre la asignación de los derechos de emisión y a los resultados del seguimiento de las emisiones, sin más restricciones que las previstas en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental(9).

(14) Los Estados miembros deben presentar un informe sobre la aplicación de la presente Directiva elaborado con arreglo a la Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas Directivas referentes al medio ambiente(10).

(15) La inclusión de instalaciones adicionales en el régimen comunitario debe ser conforme a las disposiciones de la presente Directiva, y, por consiguiente, la cobertura del régimen comunitario se puede ampliar a las emisiones de gases de efecto invernadero distintos del dióxido de carbono tales como los producidos por la industria química y la del aluminio.

(16) La presente Directiva no debe impedir a los Estados miembros mantener o establecer regímenes nacionales de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero generados por actividades distintas de las enumeradas en el anexo I o
incluidas en el régimen comunitario, o de gases de efecto invernadero generados por
instalaciones excluidas temporalmente del régimen comunitario.
(17) Los Estados miembros pueden participar en regímenes internacionales de derechos
de emisión, como Partes del Protocolo de Kioto, con cualquier otra Parte incluida en su
anexo B.
(18) El establecimiento de una relación entre el régimen comunitario y regímenes de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de terceros países
permitirá conseguir de forma más eficaz en términos de costes los objetivos de la
Comunidad en materia de reducción de emisiones que se establecen en la Decision
2002/358/CE relativa al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos.
(19) Los mecanismos basados en proyectos, en particular la aplicación conjunta y el
mecanismo para un desarrollo limpio del Protocolo de Kioto son importantes para
alcanzar los objetivos de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero y
aumentar la eficacia en términos de costes del régimen comunitario. De conformidad
con las disposiciones en la materia del Protocolo de Kioto y de los Acuerdos de
Marrakech, la utilización de los mecanismos debe ser complementaria a las medidas de
acción internas que, por consiguiente, constituirán un elemento significativo de los
esfuerzos realizados.
(20) La presente Directiva fomentará la utilización de tecnologías más eficientes desde
el punto de vista energético, incluida la tecnología de producción combinada de calor y
electricidad, que genera menos emisiones por unidad de rendimiento, mientras que la
futura Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento de la
cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la
energía promoverá concretamente la tecnología de producción combinada de calor y
electricidad.
(21) La Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la
prevención y al control integrados de la contaminación(11) establece un marco general
para la prevención y el control de la contaminación, mediante el cual podrían expedirse
permisos de emisión de gases de efecto invernadero. La Directiva 96/61/CE debe
modificarse para garantizar que no se fijan unos valores límites de emisión para las
emisiones directas de gases de efecto invernadero procedentes de una instalación sujeta
da la presente Directiva, y que los Estados miembros pueden optar por no imponer
requisitos relativos a la eficiencia energética respecto de las unidades de combustión o
de otro tipo que emitan dióxido de carbono en dicho emplazamiento, sin perjuicio de otros requisitos en virtud de la Directiva 96/61/CE.

(22) La presente Directiva es compatible con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Debe someterse a revisión a la luz de la evolución en este contexto, teniendo en cuenta la experiencia de su puesta en práctica y los avances registrados en el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(23) El comercio de derechos de emisión debe formar parte de una serie completa y coherente de políticas y medidas de los Estados miembros y de la Comunidad. Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado, en los casos en que las actividades estén cubiertas por el régimen comunitario, los Estados miembros podrán tener en consideración las repercusiones de las políticas de reglamentación, fiscal o de otro tipo que persigan los mismos objetivos. La revisión de la presente Directiva debe examinar hasta qué punto se han alcanzado dichos objetivos.

(24) El instrumento de imposición fiscal puede constituir una política nacional de limitación de las emisiones procedentes de las instalaciones excluidas temporalmente.

(25) Las políticas y las medidas deben aplicarse tanto en los Estados miembros como en la Comunidad a todos los sectores económicos de la Unión Europea, y no sólo a los sectores industrial y energético, a fin de producir reducciones de emisiones sustanciales. En concreto, la Comisión debe examinar políticas y medidas a nivel comunitario con vistas a que el sector del transporte contribuya de manera importante a que la Comunidad y sus Estados miembros cumplan sus compromisos contraídos en materia de cambio climático en el marco del Protocolo de Kioto.

(26) A pesar del potencial múltiple de los mecanismos basados en el mercado, la estrategia de la Unión Europea para la mitigación del cambio climático debe basarse en el equilibrio entre el régimen comunitario y otros tipos de medidas de alcance comunitario, nacional e internacional.

(27) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(28) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(12).
Dado que los criterios 1, 5 y 7 del anexo III no se pueden modificar mediante el procedimiento de comitología, las modificaciones con respecto a los períodos posteriores a 2012 sólo deben realizarse mediante el procedimiento de codecisión.

Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, el establecimiento de un régimen comunitario, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a las dimensiones y a los efectos de la acción propuesta, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Objeto
La presente Directiva establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el interior de la Comunidad, denominado en lo sucesivo el "régimen comunitario", a fin de fomentar reducciones de las emisiones de estos gases de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente.

Artículo 2
Ámbito de aplicación
1. La presente Directiva se aplicará a las emisiones generadas por las actividades a que se refiere el anexo I y a los gases de efecto invernadero que figuran en el anexo II.
2. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de cualquier requisito en virtud de la Directiva 96/61/CE.

Artículo 3
Definiciones
A efectos de la presente Directiva serán de aplicación las siguientes definiciones:
a) "derecho de emisión": el derecho a emitir una tonelada equivalente de dióxido de carbono durante un período determinado, válido únicamente a efectos del cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva, siendo este derecho transferible de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva;
b) "emisión": la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero a partir de fuentes situadas en una instalación;
c) "gases de efecto invernadero": los gases que figuran en el anexo II;
d) "permiso de emisión de gases de efecto invernadero": el permiso expedido con arreglo a los artículos 5 y 6;

e) "instalación": una unidad técnica fija donde se lleven a cabo una o varias actividades de las enumeradas en el anexo I, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquéllas que guarden una relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación;

f) "titular": cualquier persona que opere o controle la instalación o, si así se contempla en la legislación nacional, cualquier persona en la que se hayan delegado poderes económicos decisivos sobre el funcionamiento técnico de la instalación;

g) "persona": cualquier persona física o jurídica;

h) "nuevo entrante": toda instalación que lleve a cabo una o más de las actividades indicadas en el Anexo I, a la que se le conceda un permiso de emisión de gases de efecto invernadero o una renovación del permiso de emisión de gases de efecto invernadero debido a un cambio en el carácter o el funcionamiento de la instalación o a una ampliación de ésta, con posterioridad a la notificación a la Comisión del plan nacional de asignación;

i) "público": una o varias personas y, de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales, asociaciones, organizaciones o grupos de personas;

j) "tonelada equivalente de dióxido de carbono": una tonelada métrica de dióxido de carbono (CO2) o una cantidad de cualquier otro gas de efecto invernadero contemplado en el anexo II con un potencial equivalente de calentamiento del planeta.

Artículo 4
Permisos de emisión de gases de efecto invernadero
Los Estados miembros velarán por que, a partir del 1 de enero de 2005, ninguna instalación lleve a cabo ninguna actividad enumerada en el anexo I que dé lugar a emisiones especificadas en relación con dicha actividad, salvo si su titular posee un permiso expedido por una autoridad competente de conformidad con el procedimiento contemplado en los artículos 5 y 6 o salvo si la instalación está temporalmente excluida del régimen comunitario con arreglo al artículo 27.

Artículo 5
Solicitudes de permisos de emisión de gases de efecto invernadero
En la solicitud dirigida a la autoridad competente para la obtención de un permiso de emisión de gases de efecto invernadero constará una descripción de:
a) la instalación y sus actividades, incluida la tecnología utilizada;
b) las materias primas y auxiliares cuyo uso pueda provocar emisiones de gases enumerados en el anexo I;
c) las fuentes de emisiones de gases enumerados en el anexo I existentes en la instalación, y
d) las medidas previstas para el seguimiento y notificación de las emisiones de conformidad con las directrices adoptadas en virtud del artículo 14.
La solicitud también incluirá un resumen no técnico de los datos a que se refiere el párrafo primero.

Artículo 6
Condiciones y contenido del permiso de emisión de gases de efecto invernadero
1. La autoridad competente expedirá un permiso de emisión de gases de efecto invernadero que conceda autorización para emitir gases de efecto invernadero desde la totalidad o una parte de una instalación si considera que el titular es capaz de garantizar el seguimiento y la notificación de las emisiones.
El permiso de emisión de gases de efecto invernadero podrá cubrir una o más instalaciones en un mismo emplazamiento operado por un mismo titular.
2. En los permisos de emisión de gases de efecto invernadero constarán las siguientes indicaciones:
  a) el nombre y la dirección del titular;
  b) una descripción de las actividades y emisiones de la instalación;
  c) los requisitos de seguimiento, especificando la metodología de seguimiento y su frecuencia;
  d) los requisitos de notificación, y
  e) la obligación de entregar, en los cuatro meses siguientes al final de cada año natural, derechos de emisión equivalentes a las emisiones totales de la instalación en dicho año, verificadas de conformidad con el artículo 15.

Artículo 7
Cambios relacionados con las instalaciones
El titular notificará a la autoridad competente cualquier cambio previsto en el carácter o en el funcionamiento de la instalación o cualquier ampliación prevista de ésta que pueda hacer necesaria la actualización del permiso de emisión de gases de efecto invernadero. Cuando proceda, la autoridad competente actualizará el permiso. En los casos en que
cambie la identidad del titular de la instalación, la autoridad competente actualizará el permiso introduciendo el nombre y la dirección del nuevo titular.

Artículo 8
Coordinación con la Directiva 96/61/CE
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que, en el caso de las instalaciones que lleven a cabo actividades contempladas en el anexo I de la Directiva 96/61/CE, las condiciones y el procedimiento de expedición del permiso de emisión de gases de efecto invernadero se coordinen con los correspondientes del permiso contemplado en dicha Directiva. Los requisitos de los artículos 5, 6 y 7 de la presente Directiva podrán integrarse en los procedimientos previstos en la Directiva 96/61/CE.

Artículo 9
Plan nacional de asignación
1. Para cada período contemplado en los apartados 1 y 2 del artículo 11, cada Estado miembro elaborará un plan nacional que determinará la cantidad total de derechos de emisión que prevé asignar durante dicho periodo y el procedimiento de asignación. El plan se basará en criterios objetivos y transparentes, incluidos los enumerados en el anexo III, teniendo debidamente en cuenta las observaciones del público. Sin perjuicio del Tratado, y a más tardar el 31 de diciembre de 2003, la Comisión desarrollará orientaciones para la aplicación de los criterios enumerados en el anexo III.

Para el período contemplado en el apartado 1 del artículo 11, dicho plan se publicará y se notificará a la Comisión y a los demás Estados miembros el 31 de marzo de 2004 a más tardar. Para los períodos subsiguientes, el plan se publicará y se notificará a la Comisión y a los demás Estados miembros al menos dieciocho meses antes del principio del período correspondiente.

2. Los planes nacionales de asignación se examinarán en el seno del Comité contemplado en el apartado 1 del artículo 23.

3. En un plazo de tres meses a partir de la notificación del plan nacional de asignación de un Estado miembro de conformidad con el apartado 1, la Comisión podrá rechazar dicho plan, o cualquiera de sus elementos, por razón de su incompatibilidad con el artículo 10 o con los criterios que figuran en el anexo III. El Estado miembro sólo tomará una decisión en virtud de los apartados 1 o 2 del artículo 11 si la Comisión acepta las enmiendas propuestas. La Comisión deberá motivar sistemáticamente su decisión de rechazar un plan o cualquiera de sus elementos.

Artículo 10
Método de asignación
Para el período de tres años que comenzará el 1 de enero de 2005 los Estados miembros asignarán gratuitamente al menos el 95 % de los derechos de emisión. Para el período de cinco años que comenzará el 1 de enero de 2008, los Estados miembros asignarán gratuitamente al menos el 90 % de los derechos de emisión.
Artículo 11
Asignación y expedición de derechos de emisión
1. Para el período de tres años que comenzará el 1 de enero de 2005, cada Estado miembro decidirá la cantidad total de derechos de emisión que asignará para ese período y su asignación al titular de cada instalación. Esta decisión se tomará al menos tres meses antes del principio del período y se basará en el plan nacional de asignación elaborado en virtud del artículo 9 y de conformidad con el artículo 10, teniendo debidamente en cuenta las observaciones del público.
2. Para el período de cinco años que comenzará el 1 de enero de 2008, y para cada período de cinco años subsiguiente, cada Estado miembro decidirá la cantidad total de derechos de emisión que asignará para ese período e iniciará su proceso de asignación al titular de cada instalación. Esta decisión se tomará al menos doce meses antes del principio del período y se basará en el plan nacional de asignación del Estado miembro elaborado en virtud del artículo 9 y de conformidad con el artículo 10, teniendo debidamente en cuenta las observaciones del público.
3. Las decisiones tomadas en virtud de los apartados 1 o 2 deberán ser conformes a los requisitos del Tratado, en particular a sus artículos 87 y 88. Al decidir la asignación, los Estados miembros tendrán en cuenta la necesidad de dar acceso a los derechos de emisión a los nuevos entrantes.
4. La autoridad competente expedirá una parte de la cantidad total de derechos de emisión cada año del período contemplado en los apartados 1 o 2, a más tardar el 28 de febrero de dicho año.
Artículo 12
Transferencia, entrega y cancelación de derechos de emisión
1. Los Estados miembros velarán por que los derechos de emisión puedan transferirse entre
a) personas en la Comunidad;
b) personas en la Comunidad y personas en terceros países donde tales derechos de emisión sean reconocidos de conformidad con el procedimiento contemplado en el
artículo 25, sin más restricciones que las consideradas en la presente Directiva o las adoptadas de conformidad con ésta.

2. Los Estados miembros velarán por que se reconozcan los derechos de emisión expedidos por una autoridad competente de otro Estado miembro a efectos del cumplimiento de las obligaciones de un titular en virtud del apartado 3.

3. Los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 30 de abril de cada año, el titular de cada instalación entregue un número de derechos de emisión equivalente a las emisiones totales de esa instalación durante el año natural anterior, verificadas de conformidad con el artículo 15, y por que dichos derechos se cancelen a continuación.

4. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para velar por que los derechos de emisión se cancelen en cualquier momento a petición de su titular.

Artículo 13
Validez de los derechos de emisión
1. Los derechos de emisión serán válidos para las emisiones producidas durante el período contemplado en los apartados 1 o 2 del artículo 11 para el que se hayan expedido.

2. Transcurridos cuatro meses a partir del comienzo del primer período de cinco años contemplado en el apartado 2 del artículo 11, la autoridad competente cancelará los derechos de emisión que ya no sean válidos y que no se hayan entregado y cancelado de conformidad con el apartado 3 del artículo 12.

Los Estados miembros podrán expedir derechos de emisión a personas para el período en curso en sustitución de cualesquiera derechos de emisión de los que sean titulares y que hayan sido cancelados de conformidad con el párrafo primero.

3. Transcurridos cuatro meses a partir del comienzo de cada período subsiguiente de cinco años contemplado en el apartado 2 del artículo 11, la autoridad competente cancelará los derechos de emisión que ya no sean válidos y que no se hayan entregado y cancelado de conformidad con el apartado 3 del artículo 12.

Los Estados miembros expedirán derechos de emisión a personas para el período en curso en sustitución de cualesquiera derechos de emisión de los que sean titulares y que hayan sido cancelados de conformidad con el párrafo primero.

Artículo 14
Directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones
1. A más tardar el 30 de septiembre de 2003, la Comisión, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23, adoptará directrices para el
seguimiento y la notificación de las emisiones resultantes de las actividades enumeradas en el anexo I de los gases de efecto invernadero especificados en relación con esas actividades. Las directrices se basarán en los principios de seguimiento y notificación que figuran en el anexo IV.

2. Los Estados miembros velarán por que se realice un seguimiento de las emisiones de conformidad con las directrices.

3. Los Estados miembros velarán por que los titulares de cada instalación notifiquen las emisiones de dicha instalación durante cada año natural a la autoridad competente una vez finalizado ese año, de conformidad con las directrices.

Artículo 15
Verificación
Los Estados miembros velarán por que los informes presentados por los titulares de conformidad con el apartado 3 del artículo 14 se verifiquen de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo V, y por que la autoridad competente sea informada al respecto.

Los Estados miembros velarán por que los titulares cuyo informe verificado no haya sido considerado satisfactorio según los criterios del anexo V a más tardar el 31 de marzo de cada año respecto a las emisiones del año anterior no puedan proceder a nuevas transferencias de derechos de emisión mientras no se considere satisfactorio su informe verificado.

Artículo 16
Sanciones
1. Los Estados miembros fijarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Las sanciones previstas deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión el 31 de diciembre de 2003 a más tardar, y le comunicarán sin demora cualquier modificación posterior de las mismas.

2. Los Estados miembros velarán por que se publiquen los nombres de los titulares que hayan infringido la obligación de entregar derechos de emisión suficientes con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12.

3. Los Estados miembros velarán por que cualquier titular que no entregue suficientes derechos de emisión a más tardar el 30 de abril de cada año para cubrir sus emisiones del año anterior esté obligado a pagar una multa por exceso de emisiones. La multa por
exceso de emisiones será de 100 euros por cada tonelada equivalente de dióxido de carbono emitido por la instalación para la que el titular no haya entregado derechos de emisión. El pago de la multa por exceso de emisiones no eximirá al titular de la obligación de entregar una cantidad de derechos de emisión equivalente a la de las emisiones en exceso, en el momento de entregar los derechos de emisión correspondientes al año natural siguiente.

4. Durante el período de tres años que comenzará el 1 de enero de 2005, los Estados miembros aplicarán una multa de nivel inferior por exceso de emisiones, de 40 euros por cada tonelada equivalente de dióxido de carbono emitido por la instalación para la que el titular no haya entregado derechos de emisión. El pago de la multa por exceso de emisiones no eximirá al titular de la obligación de entregar una cantidad de derechos de emisión equivalente a la de las emisiones en exceso, en el momento de entregar los derechos de emisión correspondientes al año natural siguiente.

Artículo 17
Acceso a la información
La autoridad competente pondrá a disposición del público las decisiones sobre la asignación de derechos de emisión y los informes sobre las emisiones exigidos para la obtención del permiso de emisión de gases de invernadero que obren en poder de dicha autoridad, con sujeción a las restricciones establecidas en el apartado 3 del artículo 3 y en el artículo 4 de la Directiva 2003/4/CE.

Artículo 18
Autoridad competente
Los Estados miembros adoptarán las medidas administrativas apropiadas, incluido el nombramiento de la autoridad o autoridades competentes adecuadas, con miras a la aplicación de las normas de la presente Directiva. En los casos en que se nombre más de una autoridad competente, su actuación conforme a la presente Directiva deberá estar coordinada.

Artículo 19
Registros
1. Los Estados miembros tomarán las disposiciones necesarias para la creación y el mantenimiento de un registro que permita llevar cuenta exacta de la expedición, la titularidad, la transferencia y la cancelación de derechos de emisión. Los Estados miembros podrán incorporar sus registros a un sistema consolidado del que formen parte otros Estados miembros.
2. Cualquier persona podrá ser titular de derechos de emisión. El registro será accesible al público y constará de cuentas separadas donde se registrarán los derechos de emisión de que sea titular cada persona a la que se expidan o transfieran, o de la que se transfieran derechos de emisión.

3. Para aplicar la presente Directiva, la Comisión adoptará, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23, un reglamento relativo a un régimen normalizado y garantizado de registros nacionales, en forma de bases de datos electrónicas normalizadas, que consten de elementos comunes de información que permitan realizar el seguimiento de la expedición, la titularidad, la transferencia y la cancelación de los derechos de emisión, y que garanticen, en su caso, el acceso del público y la confidencialidad, y aseguren que no se produzcan transferencias incompatibles con las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto.

Artículo 20
Administrador Central
1. La Comisión designará a un Administrador Central que llevará un registro independiente de transacciones en el que se consignarán las expediciones, las transferencias y las cancelaciones de derechos de emisión.

2. El Administrador Central controlará, de manera automatizada, cada transacción en los registros mediante el registro independiente de transacciones, para comprobar que no se producen irregularidades en la expedición, la transferencia y la cancelación de derechos de emisión.

3. Si el control automatizado pone de manifiesto irregularidades, el Administrador Central informará de ello al Estado miembro o Estados miembros interesados, los cuales no registrarán las transacciones en cuestión ni ninguna otra transacción relativa a los derechos de emisión correspondientes hasta que no se hayan resuelto las irregularidades.

Artículo 21
Notificación por los Estados miembros
1. Los Estados miembros presentarán cada año a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. Dicho informe prestará especial atención a las disposiciones de asignación de los derechos de emisión, al funcionamiento de los registros nacionales, a la aplicación de las directrices de seguimiento y notificación, a la verificación y a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la Directiva y al tratamiento fiscal de los derechos de emisión, cuando hubiera. El primer informe se enviará a la Comisión, a más tardar, el 30 de junio de 2005. El informe se elaborará
sobre la base de un cuestionario o esquema elaborado por la Comisión de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 6 de la Directiva 91/692/CEE. El cuestionario o esquema se enviará a los Estados miembros al menos seis meses antes del vencimiento del plazo para la presentación del primer informe.

2. Basándose en los informes contemplados en el apartado 1, la Comisión publicará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva en un plazo de tres meses a partir de la recepción de los informes de los Estados miembros.

3. La Comisión organizará un intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros sobre los asuntos relacionados con la asignación, el funcionamiento de los registros, el seguimiento, la notificación, la verificación y el cumplimiento.

Artículo 22

Modificaciones del anexo III

La Comisión podrá modificar el anexo III, excepto los criterios 1, 5 y 7, para el período comprendido entre 2008 y 2012, a la vista de los informes elaborados en virtud del artículo 21 y la experiencia adquirida en la aplicación de la presente Directiva, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23.

Artículo 23

Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del artículo 8 de la Decisión 93/389/CEE.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8. El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 24

Procedimientos de inclusión unilateral de actividades y gases adicionales

1. A partir de 2008, los Estados miembros podrán aplicar el régimen de comercio de derechos de emisión de conformidad con la presente Directiva a actividades, instalaciones y gases de efecto invernadero que no estén enumerados en el anexo I, siempre que la Comisión apruebe la inclusión de dichas actividades, instalaciones y gases de efecto invernadero de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23, teniendo en cuenta todos los criterios pertinentes, en
particular la incidencia en el mercado interior, las posibles distorsiones de la competencia, la integridad medioambiental del régimen y la fiabilidad del sistema previsto de seguimiento y notificación.

A partir de 2005 los Estados miembros podrán aplicar, en las mismas condiciones, el régimen de comercio de derechos de emisión a las instalaciones que lleven a cabo las actividades enumeradas en el anexo I por debajo de los límites de capacidad contemplados en ese anexo.

2. Se especificarán las asignaciones efectuadas a instalaciones que desarrollen tales actividades con arreglo al plan nacional de asignación contemplado en el artículo 9.

3. La Comisión podrá, por propia iniciativa, o deberá, a petición de un Estado miembro, adoptar directrices en materia de seguimiento y notificación por lo que se refiere a las emisiones de actividades, instalaciones y gases de efecto invernadero que no estén enumerados en el anexo I de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23, siempre que el seguimiento y la notificación de dichas emisiones puedan realizarse con suficiente precisión.

4. En caso de que se introduzcan tales medidas, las revisiones que se lleven a cabo de conformidad con el artículo 30 tendrán asimismo en cuenta si debe modificarse el anexo I con el fin de incluir las emisiones procedentes de tales actividades de forma armonizada en el conjunto de la Comunidad.

Artículo 25
Relaciones con otros regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

1. Deberían celebrarse acuerdos con terceros países mencionados en el anexo B del Protocolo de Kioto que hayan ratificado dicho Protocolo, a efectos de establecer el reconocimiento mutuo de los derechos de emisión entre el régimen comunitario y otros regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 300 del Tratado.

2. En el caso de que se celebre un acuerdo de los contemplados en el apartado 1, la Comisión elaborará todas las disposiciones necesarias para el reconocimiento mutuo de los derechos de emisión en virtud de dicho acuerdo de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23.

Artículo 26
Modificación de la Directiva 96/61/CE
En el apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 96/61/CE se añadirán los párrafos siguientes: "En el caso de que las emisiones de gases de efecto invernadero de una instalación estén especificadas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo(13) en relación con una actividad llevada a cabo en dicha instalación, el permiso no incluirá un valor límite de emisión para las emisiones directas de ese gas a menos que sea necesario para garantizar que no se provoque ninguna contaminación local significativa.

Por lo que se refiere a las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, los Estados miembros podrán optar por no imponer requisitos relativos a la eficiencia energética respecto de las unidades de combustión o de otro tipo que emitan dióxido de carbono en el emplazamiento.

De ser necesario, las autoridades competentes modificarán el permiso según corresponda.

Los tres párrafos anteriores no se aplicarán a las instalaciones excluidas temporalmente del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de conformidad con el artículo 27 de la Directiva 2003/87/CE.".

Artículo 27
Exclusión temporal de determinadas instalaciones
1. Los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que haya instalaciones que queden excluidas con carácter temporal, hasta el 31 de diciembre de 2007, a más tardar, del régimen comunitario. Estas solicitudes, en las que se enumerarán las instalaciones de que se trate, se publicarán.

2. Si, después de tomar en consideración las observaciones del público sobre dicha solicitud, la Comisión decidiera, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23, que las instalaciones:
a) como consecuencia de políticas nacionales, limitarán sus emisiones en la misma medida que si estuvieran sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva;
b) quedarán sujetas a requisitos en materia de seguimiento, notificación y verificación equivalentes a los que se establecen en los artículos 14 y 15, y
c) estarán sujetas a sanciones al menos equivalentes a las contempladas en los apartados 1 y 4 del artículo 16 en caso de que incumplan los requisitos nacionales, dispondrá la exclusión temporal de dichas instalaciones del régimen comunitario.
Deberá garantizarse que no se produzcan distorsiones del mercado interior.

Artículo 28

Agrupación de instalaciones

1. Los Estados miembros podrán permitir que los titulares de las instalaciones dedicadas a una de las actividades enumeradas en el anexo I formen una agrupación de sus instalaciones dedicadas a la misma actividad durante el período a que se refiere el apartado 1 del artículo 11 y/o durante el primer período de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 11, conforme a lo dispuesto en los apartados 2 a 6 del presente artículo.

2. Los titulares que lleven a cabo una actividad de las enumeradas en el anexo I y que deseen formar una agrupación de sus instalaciones, solicitarán esta posibilidad a la autoridad competente, especificando las instalaciones y el periodo durante el cual desean agruparlas, y demostrarán que un administrador fiduciario será capaz de asumir las obligaciones mencionadas en los apartados 3 y 4.

3. Los titulares que deseen formar una agrupación de sus instalaciones nombrarán un administrador fiduciario:
   a) a quien se expedirá el total de derechos de emisión, calculados por instalación, de los titulares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11;
   b) que será responsable de la entrega de una cantidad de derechos de emisión igual al total de las emisiones procedentes de las instalaciones agrupadas, no obstante lo dispuesto en la letra e) del apartado 2 del artículo 6 y del apartado 3 del artículo 12; y
   c) a quien se impedirá seguir transfiriendo derechos de emisión de un titular en caso de que el informe de dicho titular no haya sido considerado satisfactorio conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 15.

4. El administrador fiduciario será objeto de sanciones en caso de que infrinja el requisito de entrega de una cantidad de derechos de emisión suficiente para cubrir la cifra total de emisiones procedentes de las instalaciones agrupadas, no obstante lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 16.

5. Todo Estado miembro que desee permitir la formación de una o más agrupaciones de instalaciones deberá presentar a la Comisión la solicitud mencionada en el apartado 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado, la Comisión podrá, en un plazo de tres meses a partir de su recepción, rechazar toda solicitud que no cumpla los requisitos de la presente Directiva. La decisión deberá ser motivada. En caso de que la solicitud sea
rechazada, el Estado miembro sólo podrá permitir la agrupación de instalaciones si la Comisión acepta las modificaciones propuestas.
6. En caso de que el administrador fiduciario no se haga cargo de las sanciones a que se refiere el apartado 4, cada titular de una instalación en la agrupación será responsable solidario con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 y en el artículo 16, respecto de las emisiones de su propia instalación.

Artículo 29
Fuerza mayor
1. Durante el período contemplado en el apartado 1 del artículo 11, los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que se asignen derechos de emisión adicionales a determinadas instalaciones en caso de fuerza mayor. La Comisión determinará si está demostrada la fuerza mayor, en cuyo caso autorizará la expedición de derechos adicionales e intransferibles por parte del Estado miembro a los titulares de dichas instalaciones.
2. La Comisión, sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado y a más tardar el 31 de diciembre de 2003, formulará orientaciones para describir las circunstancias en las que queda demostrada la situación de fuerza mayor.

Artículo 30
Revisión y posterior desarrollo
1. Basándose en los progresos registrados en el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la Comisión podrá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 de diciembre de 2004, una propuesta de modificación del anexo I para incluir en él otras actividades y emisiones de otros gases de efecto invernadero enumerados en el anexo II.
2. Basándose en la experiencia adquirida con la aplicación de la presente Directiva y en los progresos registrados en el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y a la luz de la evolución del contexto internacional, la Comisión elaborará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva, en el que examinará:
a) si se debe modificar el anexo I, y el modo de hacerlo, para incluir otros sectores implicados tales como el químico, el del aluminio y el del transporte, y otras actividades y emisiones de otros gases de efecto invernadero enumerados en el anexo II, con miras a mejorar la eficiencia económica del régimen;
b) la relación entre el comercio comunitario de derechos de emisión y el comercio internacional de derechos de emisión que se inicie en 2008;
c) a greater harmonization of the allocation method (including the organization of auctions after 2012) and the criteria applicable to national allocation plans considered in Annex III;
d) the use of credits resulting from project-based mechanisms;
e) the relationship between emission trading and other policies and measures applied by Member States and the Community, including fiscal measures, that pursue the same objectives;
f) if it is convenient to have a single community register;
g) the level of fines for excess emissions, taking into account, among other things, inflation;
h) the operation of the market for emission rights, considering, in particular, any possible market distortions;
i) how to adapt the community regime to a more European Union;
j) the aggregation of installations;
k) the possibility of developing valid parameters at community level as a basis for the allocation of emission rights, taking into account the best available techniques and a cost-benefit analysis.

The Commission will present this report to the European Parliament and the Council no later than 30 June 2006, accompanied by proposals if necessary.

3. Relating project-based mechanisms, in particular the joint implementation mechanism and the clean development mechanism, to the community regime is convenient and important to achieve global reduction of greenhouse gas emissions and increase the effectiveness in terms of cost of the community regime. Consequently, the credits from such project-based mechanisms will be recognized for this regime according to the provisions adopted by the European Parliament and the Council on the Commission's proposal, which should be applied in parallel with the community regime in 2005.

In conformity with the provisions in the matter contained in the Kyoto Protocol and the Marrakech Agreements, recourse to the mechanisms will be complementary to the internal measures.

Article 31
Incorporation into national law
1. Member States shall put in force the necessary legal, regulatory and administrative provisions to ensure compliance with the provisions of the present Directive.
a más tardar el 31 de diciembre de 2003. Informarán inmediatamente de ello a la
Comisión. La Comisión notificará a los demás Estados miembros esas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de
Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. La
Comisión informará de ello a los demás Estados miembros.

Artículo 32
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

Artículo 33
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 13 de octubre de 2003.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

P. Cox

Por el Consejo

El Presidente

G. Alemanno


(2) DO C 221 de 17.9.2002, p. 27.


(4) Dictamen del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2002 (no publicado aún en
el Diario Oficial), Posición Común del Consejo, de 18 de marzo de 2003 (DO C 125 E
de 27.5.2003, p. 72), Decisión del Parlamento Europeo, de 2 de julio de 2003 (no
publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo, de 22 de julio de 2003.


(6) DO L 33 de 7.2.1994, p. 11.

(8) DO L 167 de 9.7.1993, p. 31; Decisión modificada por la Decisión 1999/296/CE (DO L 117 de 5.5.1999, p. 35).
(12) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(13) DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
ANEXO I
CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 2, EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 4, EN EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 14 Y EN LOS ARTÍCULOS 28 Y 30
1. No están incluidas en el ámbito de la presente Directiva las instalaciones o partes de instalaciones utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.
2. Los valores umbral que figuran más adelante se refieren en general a la capacidad de producción o a la producción. Si un mismo titular realizara varias actividades de la misma categoría en la misma instalación o emplazamiento, se sumarían las capacidades de dichas actividades.

>SITIO PARA UN CUADRO>

ANEXO II
GASES DE EFECTO INVERNADERO CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 30
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido nitroso (N2O)
Hidrofluorocarburos (HFC)
Perfluorocarburos (PFC)
Hexafluoruro de azufre (SF6)
ANEXO III
CRITERIOS APLICABLES A LOS PLANES NACIONALES DE ASIGNACIÓN CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 9, 22 Y 30
1) La cantidad total de derechos de emisión por asignar durante el período pertinente será compatible con la obligación del Estado miembro de limitar sus emisiones de conformidad con la Decisión 2002/358/CE y el Protocolo de Kioto, teniendo en cuenta,
por un lado, el porcentaje de las emisiones globales que representan dichos derechos en comparación con las emisiones de fuentes no contempladas en la presente Directiva y, por otro, las medidas nacionales en materia de energía; será coherente asimismo con el programa nacional relativo al cambio climático. La cantidad total de derechos de emisión por asignar no será superior a la cantidad que probablemente resulte necesaria para aplicar estrictamente los criterios del presente anexo. Antes de 2008, la cantidad será compatible con el propósito de alcanzar o superar el objetivo correspondiente a cada Estado miembro de conformidad con la Decisión 2002/358/CE y el Protocolo de Kioto.

2) La cantidad total de derechos de emisión por asignar será coherente con las evaluaciones del progreso real y previsto hacia el cumplimiento de las contribuciones de los Estados miembros a los compromisos de la Comunidad derivados de la Decisión 93/389/CEE.

3) Las cantidades de derechos de emisión por asignar serán coherentes con el potencial, incluido el potencial tecnológico, de reducción de las emisiones de las actividades sujetas al presente régimen. Los Estados miembros podrán basar su distribución de derechos de emisión en el promedio de las emisiones de gases de efecto invernadero por producto en cada sector de actividad y en los progresos alcanzables en cada actividad.

4) El plan será coherente con los demás instrumentos legislativos y políticos comunitarios. Se tendrán en cuenta los aumentos inevitables de las emisiones resultantes de nuevos requisitos legislativos.

5) De conformidad con los requisitos del Tratado, en particular sus artículos 87 y 88, el plan no distinguirá entre empresas o sectores de modo que se favorezca indebidamente a determinadas empresas o actividades.

6) El plan incluirá información sobre la manera en que los nuevos entrantes podrán comenzar a participar en el régimen comunitario en el Estado miembro de que se trate.

7) El plan podrá contener medidas tempranas e incluirá información sobre la manera en que se tendrán en cuenta las medidas tempranas. Los Estados miembros podrán utilizar parámetros procedentes de los documentos de referencia relativos a las mejores técnicas disponibles para elaborar sus planes nacionales de asignación de derechos de emisión; estos parámetros podrán prever un elemento que dé cabida a las acciones tempranas.

8) El plan incluirá información sobre la manera en que se tendrán en cuenta las tecnologías limpias, incluidas las tecnologías energéticamente eficientes.
9) El plan incluirá disposiciones sobre la formulación de observaciones por parte del público, así como información sobre las medidas gracias a las cuales se tendrán debidamente en cuenta dichas observaciones antes de tomar una decisión sobre la asignación de derechos de emisión.

10) El plan contendrá una lista de las instalaciones cubiertas por la presente Directiva con mención de las cifras de derechos de emisión que se prevé asignar a cada una.

11) El plan podrá contener información sobre el modo en que se tendrá en cuenta la competencia de países o entidades exteriores a la Unión Europea.

ANEXO IV
PRINCIPIOS DEL SEGUIMIENTO Y NOTIFICACIÓN CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 14

Seguimiento de las emisiones de dióxido de carbono
Las emisiones se seguirán mediante cálculos o mediciones.

Cálculo
Los cálculos de las emisiones se llevarán a cabo utilizando la fórmula siguiente:

Datos de la actividad x factor de emisión x factor de oxidación

El seguimiento de los datos de la actividad (combustible utilizado, índice de producción, etc.) se hará sobre la base de los datos de suministro o mediante mediciones.

Se usarán los factores de emisión aceptados. Los factores de emisión específicos de una actividad serán aceptables para todos los combustibles. Los factores por defecto serán aceptables para todos los combustibles excepto los no comerciales (residuos combustibles tales como neumáticos y gases de procesos industriales). Se precisarán además factores por defecto específicos para filones de carbón y factores por defecto específicos de la UE o de los productores de un país para el gas natural. Los valores por defecto del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) serán aceptables en el caso de los productos de refinería. El factor de emisión de la biomasa será cero.

Si el factor de emisión no tiene en cuenta el hecho de que parte del carbono no está oxidado, se usará entonces un factor de oxidación adicional. Si se han calculado factores de emisión específicos de una actividad considerando ya la oxidación, no hará falta aplicar un factor de oxidación.
Se utilizarán los factores de oxidación por defecto definidos de conformidad con la Directiva 96/61/CE, a menos que el titular pueda demostrar que son más exactos unos factores específicos de la actividad.

Se hará un cálculo separado para cada actividad, cada instalación y cada combustible.

Medición

La medición de las emisiones se hará recurriendo a métodos normalizados o aceptados y se corroborará mediante un cálculo complementario de las emisiones.

Seguimiento de las emisiones de otros gases de efecto invernadero

Se recurrirá a los métodos normalizados o aceptados desarrollados por la Comisión, en colaboración con todas las partes interesadas pertinentes, y adoptados de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23.

Notificación de las emisiones

Todos los titulares incluirán la siguiente información en el informe sobre la instalación:

A. Datos identificativos de la instalación, en particular:
   - nombre de la instalación,
   - su dirección, incluidos el código postal y el país,
   - tipo y número de las actividades del anexo I llevadas a cabo en la instalación,
   - dirección, teléfono, fax y correo electrónico de una persona de contacto, y
   - nombre del propietario de la instalación y de cualquier sociedad matriz.

B. Para cada una de las actividades mencionadas en el anexo I que se lleve a cabo en el emplazamiento cuyas emisiones se calculen:
   - datos de la actividad,
   - factores de emisión,
   - factores de oxidación,
   - emisiones totales, e
   - incertidumbre.

C. Para cada una de las actividades mencionadas en el anexo I que se lleve a cabo en el emplazamiento cuyas emisiones se midan:
   - emisiones totales,
   - información sobre la fiabilidad de los métodos de medición, e
   - incertidumbre.

D. Para las emisiones procedentes de la combustión de energía, el informe también incluirá el factor de oxidación, a menos que ya se haya tenido en cuenta la oxidación en la definición de un factor de emisión específico de la actividad.
Los Estados miembros adoptarán medidas para coordinar los requisitos de notificación con cualquier requisito vigente de notificación, con el fin de reducir la carga que la notificación supone para las empresas.

ANEXO V
CRITERIOS DE LA VERIFICACIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 15
Principios generales
1) Las emisiones de cada actividad enumerada en el anexo I estarán sujetas a verificación.
2) El proceso de verificación incluirá el examen del informe elaborado de conformidad con el apartado 3 del artículo 14 y del seguimiento del año anterior. Estudiará la fiabilidad, crédito y exactitud de los sistemas de seguimiento y de los datos e información notificados relativos a las emisiones, en especial:
   a) los datos de la actividad notificados y las mediciones y cálculos relacionados;
   b) la elección y uso de factores de emisión;
   c) los cálculos en que se haya basado la determinación de las emisiones globales, y
d) si se ha recurrido a la medición, la conveniencia de esta opción y el uso de métodos de medición.
3) Las emisiones notificadas sólo se validarán si se aportan datos e información fidedignos y dignos de crédito que permitan la determinación de las emisiones con un alto grado de certeza, para lo cual el titular tendrá que demostrar lo siguiente:
   a) que los datos notificados no presentan contradicciones;
   b) que la recogida de los datos se ha llevado a cabo de conformidad con las normas científicas aplicables, y
   c) que la documentación pertinente de la instalación es completa y coherente.
4) El verificador disfrutará de libre acceso a todos los emplazamientos y toda la información en relación con el objeto de la verificación.
5) El verificador tendrá en cuenta si la instalación está registrada en el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
Metodología
Análisis estratégico
6) La verificación se basará en un análisis estratégico de todas las actividades llevadas a cabo en la instalación, por lo que el verificador deberá tener una visión general de todas las actividades y de su importancia para las emisiones.
Análisis de procesos
7) La verificación de la información presentada se llevará a cabo, cuando proceda, en el emplazamiento de la instalación. El verificador recurrirá a inspecciones in situ para determinar la fiabilidad de los datos y la información notificados.

Análisis de riesgos

8) El verificador someterá todas las fuentes de emisiones de la instalación a una evaluación en relación con la fiabilidad de los datos de todas las fuentes que contribuyan a las emisiones globales de la instalación.

9) Partiendo de este análisis, el verificador determinará explícitamente las fuentes que presenten un alto riesgo de errores y otros aspectos del procedimiento de seguimiento y notificación que pudieran contribuir a errores en la determinación de las emisiones globales, lo que implica en especial la elección de los factores de emisión y de los cálculos necesarios para determinar las emisiones de fuentes aisladas. Se atenderá sobre todo a las fuentes que presenten un alto riesgo de error y a los aspectos mencionados más arriba del procedimiento de seguimiento.

10) El verificador tomará en consideración cualquier método de control efectivo de riesgos aplicado por el titular con objeto de reducir al máximo el grado de incertidumbre.

Elaboración de informes

11) El verificador elaborará un informe sobre el proceso de validación en el que constará si es satisfactoria la notificación realizada de conformidad con el apartado 3 del artículo 14. Dicho informe indicará todos los aspectos pertinentes para el trabajo efectuado. Podrá hacerse una declaración que indique que es satisfactoria la notificación realizada de conformidad con el apartado 3 del artículo 14 si, en opinión del verificador, la declaración de las emisiones totales no presenta errores.

Requisitos mínimos de competencia del verificador

12) El verificador será independiente del titular, llevará a cabo sus actividades de manera profesional, competente y objetiva, y estará al tanto de:

a) las disposiciones de la presente Directiva, así como de las normas y directrices pertinentes adoptadas por la Comisión en virtud del apartado 1 del artículo 14;

b) los requisitos legales, reglamentarios y administrativos aplicables a las actividades verificadas, y

c) la generación de toda la información relacionada con cada fuente de emisiones de la instalación, en especial la relativa a la recogida, medición, cálculo y notificación de los datos.
Propia traducción

Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003 que establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y la que modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (Texto de aplicación al EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 de su artículo 175,
Vista la propuesta de la Comisión(1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4),
Considerando lo siguiente:

(1) El Libro Verde sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea inició un debate en Europa sobre el beneficio y el posible funcionamiento del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. El Programa Europeo sobre el Cambio Climático ha examinado las políticas y medidas comunitarias, incluido un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (el régimen comunitario) basado en el Libro Verde, a través de un proceso en el que participaron las distintas partes interesadas. En sus conclusiones de 8 de marzo de 2001, el Consejo reconoció la especial importancia del Programa Europeo sobre el Cambio Climático y del trabajo basado en el Libro Verde, y señaló que en la Comunidad Europea se deben tomar medidas concretas urgentemente.

(2) El Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente establecido mediante la Decisión n° 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(5) determina que el cambio climático es una prioridad de acción y contempla el establecimiento de un régimen comunitario de comercio de derechos de emisión antes de 2005. Este Programa reconoce que la Comunidad está comprometida a alcanzar una reducción del 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para el período comprendido entre 2008 y 2012 respecto a los niveles de 1990 y que a largo plazo las emisiones mundiales de estos gases tendrán que disminuir aproximadamente un 70 % respecto a los niveles de 1990.
(3) El objetivo principal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada mediante la Decisión 94/69/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1993, relativa a la conclusión (celebración) de la Convención Marco sobre el Cambio Climático(6) es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.

(4) Una vez que entre en vigor, el Protocolo de Kyoto, aprobado por la Decisión 2002/358/CE del Consejo de 25 de abril de 2002 relativa a la aprobación, en representación de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo(7) comprometerá a la Comunidad y a sus Estados miembros a reducir sus emisiones antropogénicas globales de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A del Protocolo en un 8 % respecto a los niveles de 1990 en el período comprendido entre 2008 y 2012.

(5) La Comunidad y sus Estados miembros han acordado cumplir conjuntamente sus compromisos de reducir las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kioto de conformidad con la Decisión 2002/358/CE. La presente Directiva pretende contribuir a que se cumplan en mayor medida los compromisos de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, mediante un mercado europeo de derechos de emisión de gases de efecto invernadero eficaz y con el menor perjuicio posible para el desarrollo económico y la situación del empleo.

(6) La Decisión 93/389/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1993, relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad(8), ha establecido un mecanismo de seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de evaluación del progreso en el cumplimiento de los compromisos respecto a dichas emisiones. Este mecanismo ayudará a los Estados miembros a determinar la cuota total de derechos de emisión que deben asignar.

(7) Las disposiciones comunitarias sobre la asignación de derechos de emisión por los Estados miembros son necesarias para contribuir a mantener la integridad del mercado interior y evitar distorsiones de la competencia.

(...)

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Objeto
La presente Directiva establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el interior de la Comunidad, en adelante "régimen comunitario", para fomentar reducciones de las emisiones de estos gases de forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente.

Artículo 2
Ámbito de aplicación
1. La presente Directiva se aplicará a las emisiones provenientes de las actividades que se detallan en el anexo I y a los gases de efecto invernadero que figuran en el anexo II.
2. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de cualquier requisito con arreglo a la Directiva 96/61/CE.

Article 16
Sanciones
2. Los Estados miembros velarán por que se hagan públicos los nombres de los titulares que incumplan con la obligación de entregar derechos de emisión suficientes con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12.

Artículo 23
Comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del artículo 8 de la Decisión 93/389/CEE.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8. El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3. El Comité aprobará su reglamento interno.
7. ANEXO 2: TEXTOS PARALELOS
Allowance/derechos de emisión

a)
(EN)
Article 17
The Conference of the Parties shall define the relevant principles, modalities, rules and guidelines, in particular for verification, reporting and accountability for emissions trading. The Parties included in Annex B may participate in emissions trading for the purposes of fulfilling their commitments under Article 3. Any such trading shall be supplemental to domestic actions for the purpose of meeting quantified emission limitation and reduction commitments under that Article.

(ES)
Artículo 17
La Conferencia de las Partes determinará los principios, modalidades, normas y directrices pertinentes, en particular para la verificación, la presentación de informes y la rendición de cuentas en relación con el comercio de los derechos de emisión. Las Partes incluidas en el anexo B podrán participar en operaciones de comercio de los derechos de emisión a los efectos de cumplir sus compromisos dimanantes del artículo 3. Toda operación de este tipo será suplementaria a las medidas nacionales que se adopten para cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones dimanantes de ese artículo.

b)
TRASPOSICION DE DIRECTIVA EN LA LEY ESPAÑOLA
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por:
Derecho de emisión: el derecho subjetivo a emitir, desde una instalación incluida en el ámbito de aplicación de esta Ley, una tonelada equivalente de dióxido de carbono, durante un período determinado.

c)
Ministerio de la Presidencia (BOE n. 260 de 30/10/2007)
REAL DECRETO 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.
El Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012 (PNA), aprobado por el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, establece para el quinquenio 2008-2012 la cantidad total de derechos que se prevé asignar a las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

d) (EN) PATRIOT ACT

TITLE III--INTERNATIONAL MONEY LAUNDERING ABATEMENT AND ANTI-TERRORIST FINANCING ACT OF 2001

SEC. 301. SHORT TITLE.
This title may be cited as the `International Money Laundering Abatement and Financial Anti-Terrorism Act of 2001'

SEC. 302. FINDINGS AND PURPOSES.

(a) FINDINGS- The Congress finds that

(ES)

TITULO III

Artículo 301. Título abreviado.

Podrá hacerse referencia a este título como la "Ley de 2001 para la Supresión Internacional del Lavado de Dinero y de la Financiación de Actividades Terroristas".

Artículo 302. Hallazgos y propósito.

(a) Hallazgos. El Congreso considera que

e) Guia Comun del Parlamento Europeo, del Consejo y la Comision.

15. La parte dispositiva se subdividirá en artículos y, según su extensión y complejidad, en títulos, capítulos y secciones. En los artículos que contengan listas, conviene diferenciar cada elemento de la lista con letras o números, mejor que con guiones.

Relevant/en la materia

f)

Resolution 1530 (2004)

Adopted by the Security Council at its 4923rd meeting, on 11 March 2004
The Security Council,

Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations and its relevant resolutions, in particular its resolution 1373 (2001) of 28 September 2001,

Resolución 1530 (2004)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4923a sesión,
celebrada el 11 de marzo de 2004

El Consejo de Seguridad,

Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y sus resoluciones en la materia, en particular su resolución 1373 (2001), de 28 de septiembre de 2001,

Reafirmando la necesidad

g)
Espacio Económico Europeo (EEE)
Parlamento Europeo – Ficha técnica

FUNDAMENTO JURÍDICO
Artículo 310 (238) CE (acuerdos de asociación).

OBJETIVOS
El objetivo del EEE es la creación de un mercado único que cubra no sólo a la propia Comunidad Europea, sino también a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). El mercado conjunto así creado es de unos 380 millones de habitantes.

REALIZACIONES
1. Antecedentes
El Acuerdo EEE se firmó en mayo de 1992 entre los entonces 12 Estados miembros de la Comunidad Europea y los entonces 6 Estados miembros de la AELC: Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suiza y Suecia. Sin embargo, tras los resultados adversos del referéndum de diciembre de 1992, Suiza no ratificó el Acuerdo, que entró en vigor a principios de 1994 cubriendo, por tanto, a 17 países.

Desde entonces, tres de los países que originalmente pertenecían a la AELC (Austria, Finlandia y Suecia) han pasado a ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea, y en mayo de 1995 Liechtenstein ingresó en el EEE. Por consiguiente, el Acuerdo se
aplica ahora a los 15 Estados miembros de la UE y a 3 países de la AELC, aunque no a Suiza, que, no obstante, sigue siendo miembro de la AELC.

(…) “Más del 80% de la legislación comunitaria relativa al mercado único (alrededor de 1.500 reglamentos, Directivas y decisiones) es de aplicación en toda el área del EEE, como ocurrirá con la mayor parte de la futura legislación relativa al mercado único. Además, por cuestiones prácticas, se han hecho necesarios acuerdos también en ámbitos formalmente excluidos del EEE, especialmente en el caso de los productos agrícolas y de la pesca.

h) El Comité Económico y Social Europeo(CESE) es un órgano consultivo de la Unión Europea. Fundado en 1957, ofrece un asesoramiento especializado a las grandes instituciones de la UE (Comisión Europea, Consejo de la UE, Parlamento Europeo). Esta labor la realizamos mediante nuestros "dictámenes", que se centran en las propuestas legislativas de la UE, aunque también elaboramos otros "dictámenes de iniciativa" sobre temas que consideramos que deben abordarse. Uno de nuestros cometidos principales es servir de "puente" entre las instituciones de la UE y lo que denominamos "sociedad civil organizada".

Cost-effective/eficaz en relación con el coste

i) Libro Verde

POLICY SUMMARY

This Green Paper is intended to launch a discussion on greenhouse gas emissions trading within the European Union, and on the relationship between emissions trading and other policies and measures to address climate change.

Under the Kyoto Protocol, the European Community committed itself to reducing its emissions of greenhouse gases by 8% during the period 2008-2012 in comparison with their levels in 1990. In practice, this will require an estimated reduction of 14% compared to "business as usual" forecasts [1]. Emissions trading, both internally within the Community and externally with other industrialised countries, will help reduce the cost to the Community of respecting its commitments. Together with other polices and measures, emissions trading will be an integral and major part of the Community's implementation strategy. It is the Commission's belief that the Community as a whole will need to use all the tools at its disposal to respect its international commitments, and the sooner
concrete steps are taken the better. The EU is currently preparing for ratification of the Kyoto Protocol, which it wishes to see enter into force by 2002. [1] For more details see Section 2 of COM(1999)230 dated 19.05.1999: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament "Preparing for Implementation of the Kyoto Protocol".

Emissions trading, whether domestic or international, is a scheme whereby entities such as companies are allocated allowances for their emissions. Companies that reduce their emissions by more than their allocated allowance can sell their "surplus" to others who are not able to reach their target so easily. This trading does not undermine the environmental objective, since the overall amount of allowances is fixed. Rather, it enables cost-effective implementation of the overall target and provides incentives to invest in environmentally sound technologies.

RESUMEN

El objetivo del presente Libro es iniciar un debate sobre la comercialización de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea y sobre la relación entre la comercialización de los derechos de emisión y las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático.

Con arreglo al Protocolo de Kioto, la Comunidad Europea se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 8% durante el periodo entre 2008 y 2012 respecto de los niveles de 1990. En la práctica, esto exigirá una reducción de cerca del 14% en comparación con las previsiones de la hipótesis de referencia [1]. La comercialización de los derechos de emisión, tanto dentro de la Comunidad como con los demás países industrializados, contribuirá a reducir los costes que implica el cumplimiento de sus compromisos. Además, la Comisión es del parecer de que la Comunidad en conjunto necesitará utilizar todas las herramientas a su disposición para respetar sus ambiciosos compromisos internacionales, y cuanto antes tome medidas concretas, mejor. La UE se está preparando para ratificar el Protocolo de Kioto con la esperanza de que entre en vigor en 2002. [1] Para más detalles, véase la Sección 2 del documento COM(1999)230 de 19.05.1999: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Preparación de la aplicación del Protocolo de Kioto".
La comercialización de los derechos de emisión es un sistema por el que entidades tales como las empresas se ven asignadas cuotas de emisiones; las empresas que reducen sus emisiones por encima de su cuota pueden vender sus "excedentes" a otras que no pueden alcanzar su objetivo con tanta facilidad. Este comercio no perjudica el objetivo medioambiental, ya que la cantidad global de las cuotas es fija. En cambio, sí permite alcanzar el objetivo global de forma más económica y fomenta la inversión en tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

j) Síntesis de la Legislación
The European Union is establishing a greenhouse gas emissions trading scheme for the cost-effective reduction of such emissions in the Community. This scheme should enable the Community and the Member States to meet the commitments to reduce greenhouse gas emissions made in the context of the Kyoto Protocol. Installations operating in the energy sector, iron and steel production and processing, the mineral industry and the paper and card industry will automatically be subject to the emission trading scheme.

La Unión Europea establece un régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con vistas a reducir dichas emisiones en la Comunidad de forma económicamente ventajosa. Con ayuda de este régimen, la Comunidad y los Estados miembros pretenden respetar los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero contraídos en el marco del Protocolo de Kioto. Las instalaciones que realizan actividades en los sectores de energía, producción y transformación de metales féreos, industrias minerales, fabricación de pasta de papel, papel y cartón están sujetas obligatoriamente a este régimen de comercio de derechos.

k) Otros ejemplos extraídos de IATE

cost-effective energy technology> tecnología energética con buena relación entre coste y eficacia

to achieve cost effective resource-raising> captación de recursos con condiciones favorables

cost effective coverage of densely populated areas> zonas más densamente pobladas que permiten obtener una mayor rentabilidad
8. ANEXO 3: GUÍA PRÁCTICA COMÚN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN

1. Los actos legislativos comunitarios se formularán de manera clara, sencilla y precisa

1.1 La redacción de un acto legislativo debe ser:

- **clara**, de fácil comprensión, desprovista de equívocos;
- **sencilla**, concisa, desprovista de elementos superfluos;
- **precisa**, no dejará lugar a dudas en el lector.

1.2 Este principio de sentido común es también la expresión de principios generales del Derecho, como:

- la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en el sentido de que la ley debe ser accesible a todos y comprensible por todos,
- la seguridad jurídica, la ley debe ser previsible en su aplicación.

1.2.1. Reviste una importancia particular para los actos legislativos comunitarios. Éstos deben incorporarse a un sistema que es, no sólo complejo, sino además multicultural y multilingüe (véase la directriz 5).

1.2.2. El objetivo que se persigue al aplicar este principio es doble: por un lado, conseguir que la legislación comunitaria sea más comprensible; por otro, evitar contenciosos debidos a una mala calidad de la redacción.

1.3 Las disposiciones que carecen de claridad pueden ser objeto de una interpretación restrictiva por el juez comunitario. El resultado será, en este caso, el contrario del que se espera obtener mediante la introducción en el texto de una «ambigüedad voluntaria» que se supone resolverá los problemas surgidos en la negociación de la norma (véase la sentencia en el asunto C-6/98).

1.4 Está claro que puede haber una contradicción entre las exigencias de sencillez y de precisión. A menudo la simplificación se realiza en detrimento de la precisión y viceversa. Se trata, en la práctica, de encontrar un punto de equilibrio para que la norma sea lo más precisa posible sin que por ello su nivel de comprensión resulte insuficiente. Este punto de equilibrio puede variar en función de los destinatarios de la norma (véase la directriz 3).

**Ejemplo de un texto que no ha alcanzado este punto de equilibrio:**

«Se establecerá un sistema de etiquetado obligatorio de la carne de vacuno, que será obligatorio en todos los Estados miembros a partir del 1 de enero de 2000. Sin embargo, este sistema obligatorio no excluirá la posibilidad de que un Estado...»
miembro decida aplicar este sistema exclusivamente de manera facultativa a la carne de vacuno comercializada en dicho Estado.»

1.4.1. El redactor debe intentar reducir la intención normativa a conceptos sencillos, para poder luego expresarla con sencillez. En la medida de lo posible utilizará términos del lenguaje común. Si es preciso, optará por la claridad del enunciado más que por la belleza del estilo. Por ejemplo, evitará la utilización de sinónimos y giros diferentes para expresar una misma idea.

1.4.2. Una redacción gramaticalmente correcta y que respete las normas de puntuación facilita la buena comprensión del texto en la lengua de redacción así como la traducción hacia las otras lenguas (véase la directriz 5).

2. Los actos comunitarios se redactarán teniendo en cuenta el tipo de acto de que se trate y, en particular, el carácter obligatorio o no del mismo (reglamento, Directiva, decisión, recomendación u otro tipo de acto)

2.1. Los distintos actos tienen cada uno su presentación y sus fórmulas normalizadas (véase la directriz 15) que pueden encontrarse con todo detalle en las Normas de técnica legislativa, en el Formulario de los actos del Consejo y en LegisWrite.

2.2. La manera de redactar tendrá en cuenta el tipo de acto.

2.2.1. Los reglamentos, por ser directamente aplicables y obligatorios en todos sus elementos, deben redactarse de manera que sus destinatarios no puedan tener dudas en cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan de ellos; por tanto, es necesario evitar referirse a autoridades nacionales intermediarias, salvo cuando en el acto esté prevista una acción complementaria de los Estados miembros:

Ejemplo:
«Toda empresa dispondrá de un registro [...]»

2.2.2. Las Directivas (salvo casos excepcionales, en particular, en el Tratado Euratom) tienen como destinatarios a los Estados miembros:

Ejemplo:
«Los Estados miembros velarán por que toda empresa disponga de un registro [...]»

Además deben formularse de forma menos detallada para dejar a los Estados miembros un margen suficiente de valoración a la hora de efectuar la transposición. Si la parte dispositiva es demasiado detallada y no deja este margen de valoración, el instrumento apropiado será un reglamento en lugar de una Directiva.
2.2.3. Las decisiones se redactan en función de sus destinatarios y al mismo tiempo respetan en lo esencial las normas de presentación formales de los actos de alcance general:

**Ejemplo:**
«[El Estado miembro] podrá obtener una ayuda financiera de la Comunidad en relación con el brote de peste porcina africana confirmado el […]»

2.2.4. Las recomendaciones deben respetar, mediante su redacción, la naturaleza no obligatoria de sus disposiciones:

**Ejemplo:**
«Se recomienda a los Estados miembros [...]»

2.3. La manera de redactar el acto tendrá en cuenta también su carácter vinculante o no vinculante.

2.3.1. La elección del verbo y de sus tiempos variará en función del tipo de acto y de las distintas lenguas y también de si se trata de los considerandos o de la parte dispositiva (véanse las directrices 10 y 12).

2.3.2. En la parte dispositiva de los actos de carácter vinculante, los verbos se emplearán en francés en presente de indicativo, mientras que la fórmula utilizada generalmente en inglés será «shall» seguido de infinitivo. En ambas lenguas debe evitarse el futuro en la medida de lo posible. En cambio, el uso del futuro normativo en castellano es preceptivo.

2.3.3. En cambio, en los actos no vinculantes (como las recomendaciones y las resoluciones) (véase la directriz 7), se descartarán las formas verbales del imperativo, al igual que las estructuras y la presentación que se limitan a copiar las de los actos vinculantes.

3. La redacción de los actos tendrá en cuenta a las personas a las que el acto esté destinado, para que éstas puedan conocer, sin ambigüedades, sus derechos y obligaciones. También se tendrá en cuenta a las personas encargadas de aplicar el acto.

3.1. Existen distintas categorías de destinatarios de los actos legislativos, desde la población en general a los especialistas en materias determinadas. Cada categoría debe poder hacer uso de la legislación en una lengua que le resulte comprensible.

3.2. El hecho de tener en cuenta a las distintas categorías de personas a las que van destinados los actos tiene como consecuencia la modulación, tanto de la exposición de motivos como de la parte dispositiva de los actos.
3.3. De esta forma, la transposición resultará igualmente más fácil.

3.4. Además de los destinatarios, los actos suponen la intervención de la autoridad nacional en distintos ámbitos, por ejemplo, funcionarios, científicos, jueces. La redacción del acto debe tener en cuenta este hecho; los textos pueden incluir condiciones técnicas cuya ejecución es competencia de funcionarios especializados en el ámbito regulado.

**Ejemplo de redacción específica:**

«**Artículo 3**

**El Centro de análisis de falsificaciones y la base de datos sobre falsificaciones monetarias**

1. El centro de análisis de las falsificaciones (CAF) y la base de datos sobre falsificaciones monetarias (BDFM) del SEBC se crearán y funcionarán bajo el patronato del BCE. Con la creación del CAF se persigue centralizar el análisis técnico y los datos relativos a las falsificaciones de billetes de banco denominados en euros que emitan el BCE y los BCN. Todos los datos de orden técnico y estadístico relacionados con la falsificación de billetes de banco denominados en euros se almacenarán de forma centralizada en la BDFM.

2. […]

3. A reserva de otras disposiciones legales, los BCN proporcionarán al CAF los originales de nuevos tipos de falsificaciones de billetes de banco denominados en euros que lleguen a su poder, a efectos de realizar una investigación técnica y una clasificación centralizada. La valoración preliminar sobre si una falsificación específica corresponde a un tipo ya clasificado o a una nueva categoría correrá a cargo de los BCN.»

4. Las disposiciones de los actos se formularán de manera concisa; su contenido debe ser tan homogéneo como sea posible. Conviene evitar los artículos y las frases demasiado extensos, las fórmulas inútilmente complicadas y el empleo abusivo de abreviaturas.

4.1. Lo que caracteriza a un buen estilo legislativo es la expresión sucinta de las ideas fundamentales del texto. Las cláusulas ilustrativas, con la intención de que el texto resulte más comprensible para el lector, pueden ser fuente de problemas de interpretación.

4.2. Conviene velar por la homogeneidad del texto.
4.2.1. El ámbito de aplicación debe respetarse en el conjunto del acto. Los derechos y obligaciones no deben sobrepasar el ámbito definido por dicho acto, ni extenderse a ámbitos diferentes.

4.2.2. Los derechos y obligaciones deben ser coherentes entre sí y no contradecirse.

4.2.3. Un texto esencialmente temporal no debe contener disposiciones de carácter definitivo.

4.2.4. Un acto de base no debe contener disposiciones detalladas que podrían ser objeto de una medida de ejecución.

4.3. La homogeneidad se entiende también con relación a los otros actos de la legislación comunitaria.

4.3.1. Es necesario evitar, en particular, en un mismo ámbito, solapamientos y contradicciones con respecto a otros actos.

4.3.2. Asimismo, es necesario excluir dudas sobre la aplicabilidad de otros actos (véase también la directriz 21).

4.4. Las frases deben limitarse a la expresión de una única idea, mientras que el artículo agrupa un conjunto de ideas que deben tener un nexo lógico entre sí. El texto debe contener subdivisiones fácilmente asimilables (véase el cuadro de la directriz 15) en función de la progresión del argumento, ya que un bloque de texto demasiado compacto provoca un efecto de rechazo, tanto óptico como intelectual. Esta distribución no debe dar lugar, empero, a una desmembración artificial y abusiva de la frase.

4.5. Cada artículo debe contener una única norma o regla. Su estructura debe ser lo más sencilla posible.

4.5.1. No es necesario para la interpretación, ni deseable para la claridad, que un único artículo agote todo un tema objeto de regulación. Es preferible con mucho tratar el tema por medio de varios artículos agrupados en una misma sección (véase la directriz 15).

4.5.2. Conviene evitar, sobre todo en la fase inicial de elaboración de un acto, conferir a los artículos una estructura demasiado compleja. En efecto, los proyectos y propuestas de actos serán objeto, a lo largo del proceso de adopción, de deliberaciones y negociaciones que, en la mayoría de los casos, darán lugar a más adiciones y precisiones. Las modificaciones posteriores del acto, a menudo numerosas, se incorporarán con dificultad a artículos ya sobrecargados.

Ejemplo que acumula los distintos defectos anteriormente mencionados:
«4. Los Estados miembros podrán adoptar, respecto a un determinado servicio de la sociedad de la información, medidas de excepción a lo dispuesto en el apartado 2 si se cumplen las siguientes condiciones:

a) las medidas serán:
   i) necesarias por una de las siguientes razones:
      — el orden público, en particular la prevención, las investigaciones, la detección y las actuaciones judiciales en materia criminal, en particular, la protección de los menores y la lucha contra la incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad y contra los ataques a la dignidad humana,
      — la protección de la salud pública,
      — la seguridad pública, incluida la protección de la seguridad y la defensa nacionales,
      — la protección de los consumidores, incluidos los inversores;

   ii) tomadas contra un servicio de la sociedad de información que atente contra los objetivos contemplados en el inciso i) o que constituya un riesgo serio y grave de ataque a estos objetivos;

   iii) proporcionales a estos objetivos.

b) El Estado miembro, previamente y sin perjuicio del procedimiento judicial, incluido el procedimiento preliminar y los actos realizados en el marco de una investigación criminal:

      — ha pedido al Estado miembro citado en el apartado 1, adoptar medidas que este último no tomó o no fueron suficientes;

      — ha notificado a la Comisión y al Estado miembro citado en el apartado 1 su intención de adoptar tales medidas.»

4.6. A veces es más fácil redactar frases complejas que hacer un esfuerzo de síntesis para conseguir una formulación más clara. No obstante, este esfuerzo es indispensable para lograr un texto fácilmente comprensible y traducible.

4.7. El empleo de abreviaturas debe dosificarse en función de los destinatarios potenciales. Las abreviaturas empleadas deben ser conocidas por dichos destinatarios o definirse claramente al principio (por ejemplo: «un Banco Central Europeo, denominado en lo sucesivo BCE»).

5. Durante todo el proceso conducente a su adopción, los proyectos de actos se redactarán en términos y con estructuras de frases que respeten el carácter
multilingüe de la legislación comunitaria; los conceptos o la terminología específicos de un sistema jurídico nacional se utilizarán con precaución.

5.1. El redactor de un acto comunitario de alcance general debe ser siempre consciente de que su texto debe responder a las exigencias del Reglamento nº 1 del Consejo, que impone la utilización de todas las lenguas oficiales en los actos jurídicos, lo que conlleva exigencias suplementarias con respecto a las que se aplican a la redacción de un texto legislativo nacional.

5.2. Por una parte, el texto de partida debe ser especialmente sencillo, claro y directo, ya que cualquier complejidad excesiva o cualquier ambigüedad, incluso leve, puede dar lugar a imprecisiones, aproximaciones o auténticos errores de traducción en una o varias de las otras lenguas comunitarias.

**Ejemplo de redacción que debe evitarse:**

«Los precios de mercado del producto X serán los precios salida de fábrica, sin tener en cuenta los impuestos internos:

a) del producto fresco envasado en bloques,

b) incrementados con un importe de X euros para tener en cuenta los gastos de transporte necesarios.»

**Texto mejorado:**

«Los precios de mercado del producto X serán los precios salida de fábrica del producto fresco envasado en bloques, sin tener en cuenta los impuestos internos.

Estos precios se incrementarán con un importe de X euros para tener en cuenta los gastos de transporte necesarios.»

5.2.1. Deben evitarse los giros para abreviar y las elipsis. Es decir, los que el autor utiliza, en aras de la economía, para transmitir un mensaje cuya complejidad exigiría más bien una aclaración.

**Ejemplo de redacción que debe evitarse:**

«Si los productos no se ajustan a las exigencias previstas por el artículo 5, los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para limitar o prohibir la puesta en el mercado de dichos productos o para garantizar su retirada del mercado, excepto las sanciones para el caso contrario que decidan los Estados miembros.»

**Texto mejorado:**
«Si los productos no se ajustaran a las exigencias previstas por el artículo 5, los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para limitar o prohibir la puesta en el mercado de dichos productos o para garantizar su retirada del mercado. Los Estados miembros determinarán las sanciones que deban aplicarse cuando no se respeten dichas medidas de limitación, prohibición o retirada.»

5.2.2. Deben evitarse asimismo las frases demasiado complejas, que contengan varios complementos, oraciones subordinadas o incisos.

Ejemplo de redacción que debe evitarse:

«Todas las partes del acuerdo deberán tener acceso a los resultados de los trabajos, entendiéndose que los institutos de investigación estarán facultados para reservar la utilización de los resultados para proyectos de investigación posteriores.»

Texto mejorado:

«Todas las partes del acuerdo tendrán acceso a los resultados de los trabajos. No obstante, los institutos de investigación podrán reservar la utilización de los resultados para proyectos de investigación posteriores.»

5.2.3. Las relaciones entre las distintas partes de la frase deberán ser claras desde el punto de vista gramatical. Por ejemplo, no tiene que plantearse la necesidad de preguntarse si un complemento depende del verbo principal o del verbo de una oración subordinada.

Ejemplo de redacción que debe evitarse:

«[...] para incluir y poder aplicar correctamente estas normas.»

5.2.4. También conviene evitar las expresiones de jerga, algunos términos de moda, así como ciertas locuciones latinas desviadas de su sentido jurídico corriente.

Por ejemplo:

— en castellano: «en base a» en lugar de «con base en»;
— en francés: «une approche proactive», «en synergie avec»;
— en inglés: «proactive», «integrated resource management system», «quasi-abolition of central ex ante visa controls»;
— «in fine» por «en definitiva», «a contrario» por «al contrario».

5.3. Por otra parte, las expresiones y giros empleados (en particular, aunque no sólo, los términos jurídicos) no pueden estar excesivamente vinculados a la lengua o al sistema jurídico del redactor, so pena de plantear graves problemas de traducción.

En particular, el redactor debe ser consciente de estos dos problemas:
5.3.1. Algunas expresiones de su lengua y, en particular las expresiones muy corrientes, como la expresión francesa «sans préjudice», no tienen equivalente en otras lenguas comunitarias. Por consiguiente, en estas lenguas esta expresión sólo puede traducirse recurriendo a circunloquios o a equivalentes aproximados, cuyo uso implica forzosamente una dispersión semántica entre las distintas versiones lingüísticas. Se trata de evitar, en la medida de lo posible, el empleo de expresiones demasiado «castizas» desde el punto de vista lingüístico.

5.3.2. Por lo que se refiere a la terminología propiamente jurídica, es necesario evitar los términos demasiado vinculados a los ordenamientos jurídicos nacionales.

**Ejemplo:**

el concepto de «faute» bien conocido en Derecho francés, no tiene equivalente exacto en otros sistemas jurídicos (en particular, en el Derecho inglés y en el Derecho alemán); por tanto, es preferible utilizar, según el caso, términos como «illégalité» (ilegalidad), «manquement» (incumplimiento) (de una obligación), etc., que pueden traducirse fácilmente a las otras lenguas: por «illegality » o «breach», respectivamente.

5.4. El resultado al que debe aspirarse es el siguiente: en la medida de lo posible y habida cuenta de la especificidad del Derecho comunitario y de su terminología, las personas encargadas de la aplicación del acto o de su interpretación en cada Estado miembro (funcionarios, jueces, abogados, etc.) no deben percibirlo como una «traducción», en el mal sentido del término, sino como un texto que respeta un determinado estilo normativo. En efecto, los textos repletos de términos prestados, de calcos o de jerga de difícil comprensión son la causa de una gran parte de las críticas a la legislación comunitaria, considerada, en estos casos, como algo extraño.

5.5. Por último, cabe realizar dos observaciones eminentemente prácticas en lo que respecta al nexo entre el texto de partida y sus traducciones correspondientes.

5.5.1. En primer lugar, el redactor debe velar por que el traductor pueda identificar de manera inmediata las fuentes utilizadas en el texto de partida. Si un fragmento del texto de partida ha sido retomado de un texto existente (Tratado, Directiva, reglamento, etc), tal circunstancia debe poder deducirse claramente del propio texto o indicarse por separado, llegado el caso, mediante los medios informáticos adecuados (véase la directriz 6). Cualquier cita oculta, sin mención de la fuente, corre el riesgo de dar lugar a una traducción libre en una o varias lenguas cuando precisamente el redactor ha querido utilizar los términos auténticos de una disposición existente.
5.5.2. En segundo lugar, el redactor debe saber que pueden serle de gran utilidad las observaciones de los traductores y, de manera más general, de todos los servicios que realizan un examen lingüístico de su texto. En efecto, el examen del texto desde este punto de vista proporciona la ocasión de detectar errores y ambigüedades que pueden ser inherentes al texto de partida, aunque éste haya sido objeto de prolongadas reflexiones e incluso, o quizás sobre todo por ello, cuando la redacción haya sido objeto de dilatados debates entre varias personas. En ese momento, el redactor puede recibir información de los problemas detectados. En muchos casos, la mejor solución consistirá en retocar no la traducción sino el original.

6. La terminología utilizada debe ser coherente tanto entre las disposiciones de un mismo acto como entre la de dicho acto y la de los actos comunitarios vigentes, en particular en la misma materia.

Los mismos términos deben expresar idénticos conceptos y, en la medida de lo posible, lo deben hacer sin apartarse del sentido que tienen en el lenguaje corriente, jurídico o técnico.

6.1. Con el fin de facilitar la comprensión y la interpretación de un acto normativo, es necesario velar por la coherencia del texto. Hay que distinguir entre la coherencia formal que se refiere únicamente a los aspectos de la terminología, y la coherencia en cuanto al fondo en sentido más amplio, que se refiere a la lógica del conjunto del acto.

Coherencia formal

6.2. La coherencia terminológica significa que es necesario utilizar los mismos términos para expresar los mismos conceptos y que no deben utilizarse términos idénticos para expresar conceptos diferentes. El objetivo consiste en eliminar toda ambigüedad, contradicción o duda en cuanto al significado de un concepto. Por tanto, el mismo término debe utilizarse de manera uniforme para decir la misma cosa, debiendo elegirse otro término para expresar un concepto diferente.

6.2.1. Esto es válido para las disposiciones de un mismo acto, incluidos sus anexos y también para otros actos con él relacionados como, por ejemplo, los actos de aplicación y todos los demás actos del mismo sector. Generalmente, debe quedar garantizada la coherencia de la terminología respecto a la legislación vigente.

6.2.2. Es necesario emplear los términos en su acepción usual. Si una misma palabra tiene un sentido diferente en el lenguaje jurídico y en el lenguaje corriente o técnico, la frase debe redactarse de modo que se evite cualquier equívoco.
6.2.3. En aras de la precisión y para evitar problemas de interpretación, puede ser conveniente definir un término (sobre este punto, véase la directriz 14).

Coherencia en cuanto al fondo

6.3. También debe mantenerse la coherencia de la terminología en relación con el contenido del propio acto. Esto quiere decir que el acto no debe contener contradicciones.

6.4. Las definiciones deben respetarse en el conjunto del acto, por lo que hay que utilizar las definiciones de manera uniforme y el contenido no debe apartarse de las definiciones dadas.

7. Todos los actos comunitarios de alcance general se redactarán conforme a una estructura modelo (título, preámbulo, parte dispositiva y, en su caso, anexos).

7.1. El «título» incluye las indicaciones que figuran en el encabezamiento del acto y que permiten identificarlo. Puede ir seguido de algunos datos técnicos (mención de la lengua en la que el texto es auténtico y de la pertinencia a efectos del EEE, número administrativo, etc.) que se intercalan, cuando proceda, entre el título propiamente dicho y el preámbulo.

7.2. Por «preámbulo», se entiende el texto que se encuentra entre el título y la parte dispositiva del acto, es decir, los vistos, los considerandos y las fórmulas solemnes que les acompañan.

7.3. La «parte dispositiva» es la parte normativa del acto. Está compuesta de artículos agrupados eventualmente en títulos, capítulos y secciones (véase el cuadro de la directriz 15), y de anexos.

Para las distintas partes de la estructura modelo, véanse las directrices que son de aplicación específica.

Para obtener modelos de actos normalizados, consúltense las maquetas adjuntas, extraídas de LegisWrite.

8. El título de los actos contendrá una indicación del objeto tan sucinta y completa como sea posible y que no induzca a error sobre el contenido de la parte dispositiva. Si es preciso, el título podrá ir seguido de un título abreviado.

8.1. El título, es decir, la fórmula elegida para proporcionar en el título algunos datos sobre el objeto esencial del acto, debe, sobre todo, indicar a quién interesa o no interesa el acto. Debe dar una idea lo más clara posible del contenido del acto. Conviene no sobrecargar el título con indicaciones que no aporten nada a tal efecto, sino más bien emplear palabras clave características de los distintos ámbitos de la normativa.
comunitaria (en este contexto es útil consultar la estructura analítica del repertorio de la legislación comunitaria vigente).

8.2. La pregunta que el redactor debe plantearse es la siguiente: ¿qué elementos deben figurar en el título para inducir al lector directamente afectado (por ejemplo, no todos los agricultores, sino únicamente todos los productores de manzanas) a leer el acto definido por el título?

Tomemos, por ejemplo, el título «Reglamento […] por el que se restablece un derecho antidumping definitivo sobre los bolsos de cuero procedentes de la República Popular China y vendidos a la exportación a la Comunidad por Gainth Industrial Ltd Macia Company Ltd Yen Sheng Factory Ltd, Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd y Panyu Simone Handbag Ltd y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1567/97 del Consejo con el fin de aplicar los derechos individuales establecidos para dos promotores exportadores a sociedades vinculadas que hayan comenzado a fabricar bolsos de cuero».

Este título pudo modificarse con el siguiente resultado:

«Reglamento […] por el que se restablece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bolsos de cuero originarios de la República Popular de China y vendidos para su exportación a la Comunidad por algunos productores-exportadores y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1567/97».

8.3. El título del acto debe ser diferente de los títulos de los otros actos en vigor (véase no obstante el punto 8.4).

8.4. Un caso particular es el de los actos que incluyen modificaciones de actos previos. Se debe considerar que el título no está completo si no menciona por su número todos los actos modificados. En efecto, sin tal mención, no es posible encontrar todas las modificaciones de un acto dado. Si el acto no hace más que modificar otro acto, se mencionará el título y el número de orden de este último, o su número y el objeto de la modificación. Si, por el contrario, el acto establece disposiciones autónomas y modifica en consecuencia, de manera totalmente accesoria, otro acto, solamente se indicará el número de este último.

8.5. Otro caso que debe indicarse es el del título de los actos de aplicación; éste incluye la mención del acto básico por su número de orden y su título si se trata de las modalidades generales, o por su número y el ámbito si se trata de las modalidades específicas.
8.6. En el caso de los actos individuales, el título va seguido, cuando proceda, de la indicación de la lengua o lenguas que dan fe.

Título abreviado

8.7. La utilidad del título abreviado de un acto normativo es menos evidente en Derecho comunitario, en el que los actos se caracterizan por un código alfanumérico (por ejemplo «1999/123/CE»), que en los sistemas que no conocen tal numeración. Aún así, en algunos casos, la práctica ha introducido la utilización de un título abreviado [por ejemplo Reglamento (CEE) n° 4064/89 = «Reglamento sobre las concentraciones»] y conviene que, desde el momento de elaboración de la norma, el redactor se cuestione la posible utilidad de un título de este tipo.

8.8. Hay algunas normas que se aplican al título abreviado:

- se crea en el momento de adopción del acto, en previsión de su futura utilidad, vista la importancia del acto; está contraindicado cuando existan múltiples actos próximos en el mismo ámbito, en cuyo caso podría dar lugar a confusión;
- no substituye a la utilización del título completo en la primera referencia al acto que se realice en un acto posterior;
- su utilización no es obligatoria (ya que, según los casos, el código alfanumérico puede ser un medio de referencia más conveniente y seguro);
- si se emplea, constituye la única abreviatura autorizada del título del acto.

En resumen:

8.9. El título completo de un acto normativo incluye, por este orden:
1) la indicación del tipo de acto,
2) la abreviatura de la Comunidad de que se trate, el número de orden del acto y el año,
3) el nombre de la institución o las instituciones autoras del acto,
4) la fecha de adopción,
5) la indicación sucinta del asunto.

8. El título de los actos contendrá una indicación del objeto tan sucinta y completa como sea posible y que no induzca a error sobre el contenido de la parte dispositiva. Si es preciso, el título podrá ir seguido de un título abreviado.

8.1. El título, es decir, la fórmula elegida para proporcionar en el título algunos datos sobre el objeto esencial del acto, debe, sobre todo, indicar a quién interesa o no interesa el acto. Debe dar una idea lo más clara posible del contenido del acto. Conviene no sobrecargar el título con indicaciones que no aporten nada a tal efecto, sino más bien emplear palabras clave características de los distintos ámbitos de la normativa.
comunitaria (en este contexto es útil consultar la estructura analítica del repertorio de la legislación comunitaria vigente).

8.2. La pregunta que el redactor debe plantearse es la siguiente: ¿qué elementos deben figurar en el título para inducir al lector directamente afectado (por ejemplo, no todos los agricultores, sino únicamente todos los productores de manzanas) a leer el acto definido por el título?

Tomemos, por ejemplo, el título «Reglamento [...] por el que se reestablece un derecho antidumping definitivo sobre los bolsos de cuero procedentes de la República Popular China y vendidos a la exportación a la Comunidad por Gainth Industrial Ltd Macia Company Ltd Yen Sheng Factory Ltd, Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd y Panyu Simone Handbag Ltd y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1567/97 del Consejo con el fin de aplicar los derechos individuales establecidos para dos promotores exportadores a sociedades vinculadas que hayan comenzado a fabricar bolsos de cuero».

Este título pudo modificarse con el siguiente resultado:

«Reglamento [...] por el que se reestablece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bolsos de cuero originarios de la República Popular de China y vendidos para su exportación a la Comunidad por algunos productores-exportadores y por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1567/97».

8.3. El título del acto debe ser diferente de los títulos de los otros actos en vigor (véase no obstante el punto 8.4).

8.4. Un caso particular es el de los actos que incluyen modificaciones de actos previos. Se debe considerar que el título no está completo si no menciona por su número todos los actos modificados. En efecto, sin tal mención, no es posible encontrar todas las modificaciones de un acto dado. Si el acto no hace más que modificar otro acto, se mencionará el título y el número de orden de este último, o su número y el objeto de la modificación. Si, por el contrario, el acto establece disposiciones autónomas y modifica en consecuencia, de manera totalmente accesoria, otro acto, solamente se indicará el número de este último.

8.5. Otro caso que debe indicarse es el del título de los actos de aplicación; éste incluye la mención del acto básico por su número de orden y su título si se trata de las modalidades generales, o por su número y el ámbito si se trata de las modalidades específicas.
8.6. En el caso de los actos individuales, el título va seguido, cuando proceda, de la indicación de la lengua o lenguas que dan fe.

**Título abreviado**

8.7. La utilidad del título abreviado de un acto normativo es menos evidente en Derecho comunitario, en el que los actos se caracterizan por un código alfanumérico (por ejemplo «1999/123/CE»), que en los sistemas que no conocen tal numeración. Aún así, en algunos casos, la práctica ha introducido la utilización de un título abreviado [por ejemplo Reglamento (CEE) n° 4064/89 = «Reglamento sobre las concentraciones»] y conviene que, desde el momento de elaboración de la norma, el redactor se cuestione la posible utilidad de un título de este tipo.

8.8. Hay algunas normas que se aplican al título abreviado:

- se crea en el momento de adopción del acto, en previsión de su futura utilidad, vista la importancia del acto; está contraindicado cuando existan múltiples actos próximos en el mismo ámbito, en cuyo caso podría dar lugar a confusión;
- no sustituye a la utilización del título completo en la primera referencia al acto que se realice en un acto posterior;
- su utilización no es obligatoria (ya que, según los casos, el código alfanumérico puede ser un medio de referencia más conveniente y seguro);
- si se emplea, constituye la única abreviatura autorizada del título del acto.

**En resumen:**

8.9. El título completo de un acto normativo incluye, por este orden:

1) la indicación del tipo de acto,
2) la abreviatura de la Comunidad de que se trate, el número de orden del acto y el año,
3) el nombre de la institución o las instituciones autoras del acto,
4) la fecha de adopción,
5) la indicación sucinta del asunto.

9. Los vistos tienen por función indicar la base jurídica del acto, así como las principales fases del procedimiento que hayan conducido a su adopción.

9.1. Los vistos que figuran al principio del preámbulo, sirven para indicar:

- la base jurídica del acto, es decir, la disposición que asigna la competencia para adoptar el acto;
- las propuestas, recomendaciones, iniciativas, proyectos, solicitudes o dictámenes (1) obligatoriamente solicitados así como, cuando proceda, el procedimiento seguido (en particular: codecisión, cooperación);
• algunos dictámenes y otros actos de procedimiento cuya solicitud no es obligatoria como, en particular, los dictámenes del Parlamento Europeo solicitados con carácter facultativo.

Conviene comprobar si lo que se cita constituye realmente un visto o si convendría colocarlo en otro lugar del texto (véanse los puntos 9.13 y 9.14).

**Presentación**

9.2. Normalmente, todos los vistos empiezan con la misma fórmula (en español, con la palabra «Visto» en mayúsculas).

**Base jurídica**

9.3. El primer visto se refiere, de una manera general, al Tratado que constituye la base general de la acción de que se trate.

El visto se redacta del siguiente modo: «Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [...]» o, según el caso, «[...] la Comunidad Europea de la Energía Atómica» o «[...] el Tratado de la Unión Europea».

Cuando se citen varios Tratados debe respetarse el orden siguiente: CE, Euratom.

9.4. Si la base jurídica directa del acto es una disposición del Tratado, la cita global de éste se acompañará de «y, en particular,» seguido del artículo pertinente (2).

Ejemplo:

«Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 37»

9.5. Si, por el contrario, la base jurídica directa del acto se encuentra en un acto de Derecho derivado (3), se cita éste en un segundo visto con el artículo pertinente, precedido también de la expresión «y, en particular,».

Ejemplo:

«vu le traité instituant la Communauté européenne,

«Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (*) y, en particular, el apartado 5 de su artículo 13,»

9.6. La base jurídica debe distinguirse claramente de las disposiciones que fijan el objeto, las condiciones y las modalidades de fondo de las decisiones que deben adoptarse. Las disposiciones de mero procedimiento (por ejemplo, los artículos 251 y 300 del Tratado CE) no constituyen bases jurídicas.
Por ejemplo, los reglamentos que establecen una organización común de mercados agrícolas deben citar en el visto el artículo 37 del Tratado CE, que confiere al Consejo el poder de decisión en la materia por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previo dictamen del Parlamento Europeo, y no los artículos 33 y 34 de dicho Tratado, que definen los objetivos de la política agrícola común y los principios que deben regir la organización común.

9.7. Los casos de los acuerdos internacionales celebrados en virtud del procedimiento del artículo 300 del Tratado CE y de los actos adoptados en virtud de las disposiciones correspondientes del título IV de dicho Tratado son atípicos y merecen una mención especial.

Ejemplo:
«Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 37, en relación con el apartado 2 y con el párrafo primero del apartado 3 de su artículo 300.»

9.8. En este mismo sentido, cuando un acto del Consejo determina en una serie de artículos el objeto de las futuras decisiones e indica en otro artículo la institución competente para tomar tales decisiones, es este último artículo, y solamente éste, el que debe citarse.

9.9. Asimismo, cuando un acto contiene dentro de un mismo artículo un apartado sobre el objeto de las medidas y otro que atribuye competencia, solamente se citará este último apartado (4), y no todo el artículo.

Por ejemplo, para la aprobación de las normas de desarrollo de los contingentes arancelarios para los productos lácteos, se contemplará el apartado 1 del artículo 29 del Reglamento (CE) n° 1255/1999 del Consejo.

Los actos de procedimiento
9.10. Asimismo, los vistos de los actos preparatorios y, en particular, las propuestas de la Comisión y sus posibles modificaciones, los dictámenes del Parlamento Europeo, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones, deben ir seguidos de una llamada de nota a pie de página, en la cual se indicará el DO en el que se publicó el dictamen (ejemplo: DO C 128 de 9.6.1975, p. 11). Si el dictamen en cuestión aún no se ha publicado, en la nota se especificará la fecha en la que se emitió.

Ejemplo:
[...] «Dictamen emitido el 10 de abril de 1992 (aún no publicado en el DO)». 
9.11. El visto que corresponde al procedimiento de codecisión se redacta de la siguiente manera:

«De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado». y va seguido de una llamada de nota a pie de página que indica todas las etapas del procedimiento. Cuando concluye con éxito una conciliación, este visto se completa con la mención siguiente:

«De conformidad [...] del Tratado, a la vista del texto conjunto aprobado el [...] por el Comité de Conciliación».

9.12. El visto del procedimiento debe utilizarse para algunos actos adoptados sobre un fundamento jurídico que remite a un procedimiento de adopción contenido en otro artículo del Tratado. Por ejemplo, el apartado 3 del artículo 110 (fundamento jurídico) remite al procedimiento previsto en el apartado 6 del artículo 107. Este último artículo debe ser contemplado de la misma manera que el artículo 251.

Indicaciones que no constituyen vistos

9.13. Conviene verificar si lo que se pretende incluir en un visto se refiere al fundamento jurídico o al procedimiento. Si para la buena comprensión de la parte dispositiva, o para el control de la legalidad, se considera necesario recordar el contenido esencial de otras disposiciones distintas de la base jurídica, este recordatorio se incluirá en los considerandos. Los recordatorios más generales podrán figurar en la exposición de motivos.

9.14. Las disposiciones institucionales generales del Tratado CE (por ejemplo, los artículos 205 y 249), que sean también de aplicación por lo que respecta al acto de que se trate, tampoco deben mencionarse en los vistos.

N.B: Algunos actos previos (dictámenes de órganos técnicos, consultas no obligatorias) se colocan normalmente al final de los vistos y por medio de fórmulas como «Considerando el dictamen de [...]», «Previa consulta a [...]».

Al final de los vistos puede figurar también:

— en una decisión del Consejo que establece un programa de investigación, la mención:

«Considerando el dictamen emitido por el Comité de la investigación científica y técnica (Crest)»;

— en un acuerdo interno o en una decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, las menciones: «Previa consulta a la Comisión», o
«De acuerdo con la Comisión»;
— dans des actes de la Commission pris en vertu de la procédure du comité consultatif:
— en actos de la Comisión adoptados en virtud del procedimiento del comité consultivo: «Previa consulta al Comité consultivo ...(nombre del Comité)» (5).
10. La finalidad de los considerandos es motivar de modo conciso las disposiciones esenciales de la parte dispositiva, sin reproducir ni parafrasear su texto. No deben incluir disposiciones con carácter normativo o declaraciones de intención política.
10.1. Se entiende por «considerandos» la parte del acto que contiene la motivación de éste y que se incluye entre los vistos y la parte dispositiva del acto. La motivación comienza por «Considerando lo siguiente:» y continúa con puntos numerados (véase la directriz 11) formados por una o por varias frases completas. Se formula de modo no imperativo ya que no debe confundirse con la parte dispositiva.
10.2. La motivación de los reglamentos, Directivas y decisiones es obligatoria. Tiene por objeto dar a conocer a toda persona interesada las condiciones en que el autor del acto ejerció la competencia relativa al acto en cuestión (véase el asunto 24/62) y conceder la posibilidad a las partes de un litigio de defender sus derechos, así como al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de efectuar su control.
10.3. Si es necesario recordar el contexto histórico del acto, el relato seguirá el orden cronológico de los hechos. Los elementos de la motivación de las disposiciones específicas del acto siguen el orden de éstas.
El esquema ideal de la motivación de los actos consiste en:
— una exposición concisa de los elementos de hecho y de Derecho que deben tomarse en consideración;
— la conclusión de que, por lo tanto, es necesario u oportuno adoptar las medidas contempladas en la parte dispositiva.
10.4. No cabría precisar más el contenido de una motivación válida para un acto jurídico comunitario. En efecto, resulta imposible reducir a la uniformidad el modo de motivar unos actos generales e individuales que afectan a materias distintas o que se han adoptado en circunstancias diferentes.
No obstante, pueden enunciarse algunas normas de principio de la motivación
10.5. Los considerandos deben motivar de forma concisa las disposiciones esenciales contenidas en la parte dispositiva del acto. De ello se desprende que:
10.5.1. Los considerandos han de constituir una verdadera motivación. Ello excluye la cita de la base jurídica (que debe figurar en los vistos) o la repetición del fragmento en la disposición citada como la base jurídica que confiere la competencia para actuar. Además, los considerandos son inútiles o no responden a su finalidad cuando se limitan a anunciar el objeto del texto o a reproducir o incluso parafrasear sus disposiciones, sin indicar en ellos los motivos.

10.5.2. Deben rechazarse los considerandos que simplemente declaran la conveniencia de adoptar disposiciones, sin indicar las razones que las justifican.

10.5.3. Es necesario evitar que la motivación de un acto se realice, aunque sólo sea parcialmente, mediante una simple remisión a la motivación de otro acto (motivaciones cruzadas) (véase el asunto 230/78 y el asunto 73/74).

10.5.4. Los considerandos deben guardar relación con la parte dispositiva; su orden debe corresponder en la medida de lo posible al de las decisiones que motivan.

10.6. Evidentemente, no es necesario justificar individualmente cada disposición. En cambio, siempre es necesario motivar la derogación de un acto o la supresión de una disposición (véase también el punto 10.14).

10.7. Debe excluirse todo considerando que no presente interés para la justificación de la parte dispositiva, sin perjuicio de las excepciones siguientes:
— el caso del artículo 308 del Tratado CE; en este supuesto, se utilizará la fórmula siguiente:
«El Tratado no ha previsto, para la adopción [de la presente Decisión] [...] más poderes de acción que los del artículo 308»
— cuando cabe dudar entre diferentes bases jurídicas, por ejemplo, entre los artículos 37 y 94 o 95; 95 y 175; 26, 37 y 133 del Tratado CE; en este caso, conviene explicar la elección de la base jurídica.

10.8. Asimismo, cuando una base jurídica permite recurrir a actos jurídicos sin precisar su naturaleza («El Consejo adoptará las medidas necesarias [...]») y cuando no se desprende del contenido de la medida que debe adoptarse cuál es el instrumento jurídico comunitario apropiado, conviene indicar las razones por las que se ha elegido un instrumento jurídico determinado. Así, si en un caso determinado se puede legislar por medio de un reglamento directamente aplicable, conviene explicar por qué esto es preferible a adoptar una Directiva que requiere una transposición en el Derecho nacional. El autor también debe tener en cuenta las consignas del protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
El alcance de la obligación de motivar depende de la naturaleza del acto o de la disposición en cuestión.

a) Actos de alcance general

10.9. En los actos normativos de base se procurará, antes que explicar todas las razones de ser de cada disposición particular, centrar la motivación en la filosofía general del acto. No obstante, un determinado número de disposiciones particulares habrán de motivarse específicamente, bien en razón de su importancia, bien porque no se insertan dentro de la línea general precitada.

10.10. En los actos de aplicación, aunque debe desplegarse siempre un cierto esfuerzo en pro de la concisión, la motivación ha de ser necesariamente más específica.

10.11. No obstante, la motivación de estos actos no debe necesariamente especificar ni, con mayor motivo, apreciar los hechos en consideración de los cuales se adoptó el acto. En particular, una motivación detallada y cifrada de los actos del tipo de los que se refieren a la fijación de exacciones regulatorias o restituciones agrícolas es prácticamente imposible; conviene pues limitarse a la simple indicación de los criterios y métodos empleados para los cálculos, indicando, por una parte, la situación global que condujo a la adopción del acto y, por otra parte, los objetivos generales que se propone lograr (véase el asunto 16/65).

b) Actos individuales

10.12. Los actos individuales, sobre todo si rechazan una solicitud, deben motivarse de una forma aún más precisa.

10.13. Es el caso, por ejemplo, de las decisiones relativas a competencia, en las que deben describirse situaciones jurídicas y de hecho complejas; aún así, como quiera que la decisión debe seguir siendo clara, deberá realizarse también un esfuerzo de concisión.

c) Disposiciones particulares

10.14. Determinadas disposiciones han de motivarse con un especial cuidado, especialmente aquellas que:

- se adoptan por vía de excepción;
- se oponen al régimen general;
- constituyen excepciones a los principios generales, como las disposiciones con efectos retroactivos;
- pueden causar un perjuicio a determinados interesados;
- fijan la entrada en vigor el mismo día de su publicación.
d) Motivación de la subsidiariedad y de la proporcionalidad del acto

10.15. Para estos principios, conviene insertar una motivación particular.

10.15.1. Las instituciones, en el ejercicio de sus competencias normativas, tienen en cuenta el principio de subsidiariedad y justifican su observancia en la exposición de motivos y, de forma más sucinta, en los considerandos.

10.15.2. El texto del considerando «subsidiariedad» varía dependiendo de los casos, pero sigue el esquema del punto 10.15.3. No obstante, conviene recordar la distinción que realiza el artículo 5 del Tratado CE entre los ámbitos de competencia exclusiva de la Comunidad y los que se refieren a otras competencias (6).

10.15.3. En los ámbitos de competencia exclusiva de la Comunidad, lo único que el párrafo tercero del artículo 5 exige es el respeto del principio de proporcionalidad. Por ello, el texto del considerando contendrá en particular los siguientes elementos:

«De acuerdo con el principio de proporcionalidad, es necesario y conveniente con el fin de aplicar el objetivo fundamental ... (mencionar el objetivo general) regular ... (mencionar las medidas específicas reguladas por el acto del que se trata). (acto) ... no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 5 del Tratado».

10.15.4. En los casos en que la competencia comunitaria no es exclusiva, el considerando incluirá a la vez la motivación «subsidiariedad» propiamente dicha, así como la de proporcionalidad anteriormente mencionada, de acuerdo con el ejemplo siguiente:

«Dado que los objetivos de la acción pretendida ... (mencionar los objetivos) ... no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros (mencionar las razones) ... y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a (mencionar las dimensiones o los efectos de la acción) ... a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo (el acto) ... no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos».

Motivación «comitología»

10.16. En los actos básicos que implican un procedimiento de Comité para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, una motivación normalizada hace referencia a la Decisión 1999/468/CE del Consejo (7).

Menciones de las consultas
10.17. La Decisión 1999/468/CE del Consejo fija las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Las consultas previstas por esta Decisión se mencionan en el preámbulo de los actos adoptados por la Comisión en el ejercicio de dichas competencias.

10.17.1. La consulta de un Comité de gestión (artículo 4 de la Decisión) o de un Comité de reglamentación (artículo 5 de la Decisión) produce siempre efectos jurídicos que varían según los distintos casos hipotéticos previstos en el acto básico. No se menciona en un visto, sino en el último considerando. [Para la mención de la consulta de un Comité consultivo, véase el punto 9.14.]

10.17.2. Las fórmulas que deben emplearse difieren según los casos.

**La inscripción de considerandos financieros en los actos legislativos**

10.18. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión celebraron el 6 de mayo de 1999 un acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (8), que sustituye, con efecto en la misma fecha, a la declaración del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de 6 de marzo de 1995 relativa a la inserción de disposiciones financieras en los actos legislativos (9). El acuerdo establece en su apartado 33 que los actos que se refieran a programas plurianuales adoptados con arreglo al procedimiento de codecisión incluirán una disposición en la cual el legislador establecerá la dotación financiera del programa para todo su periodo de vigencia. Esta disposición se acompañará del siguiente considerando tipo:

«[El presente acto] establece, para toda la duración del programa, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 33 del acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario, constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria».

10.19. De acuerdo con el apartado 34 del Acuerdo interinstitucional mencionado, los actos relativos a los programas plurianuales no sujetos al procedimiento de codecisión no incluirán un «importe estimado necesario». Las propuestas de la Comisión no contienen, por lo tanto, ninguna disposición financiera para actos distintos de los mencionados en el punto 10.18. En caso de que el Consejo desee introducir una referencia financiera, ésta será ilustrativa de la voluntad del legislador y no afectará a las competencias de la Autoridad Presupuestaria definidas en el Tratado. Se mencionará
esta disposición en cada uno de los actos que contengan dicha referencia financiera (10).

10.19.1. En estas circunstancias, estos actos contienen el siguiente considerando:

«En [el presente acto] se ha incluido un importe de referencia financiera, con arreglo al punto 34 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario, para toda la duración del programa, sin que ello afecte a las competencias de la Autoridad Presupuestaria definidas por el Tratado».

10.19.2. Si el importe de referencia financiera anteriormente mencionado es objeto de un acuerdo con el Parlamento Europeo, en el marco del procedimiento de concertación previsto en la declaración común de 4 de marzo de 1975 (11), se considerará como importe de referencia en el sentido del punto 10.18.

10.19.3. En este caso, el considerando citado en el punto 10.18 queda sustituido por el siguiente texto y no se modifica la parte dispositiva:

«En el marco del procedimiento de concertación previsto en la declaración común de 4 de marzo de 1975 [...], el Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo sobre un importe que constituye, para toda la duración del programa, la referencia privilegiada con arreglo al punto 33 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario».

* De lo anterior se deduce que es posible alcanzar una cierta normalización de la motivación. LegisWrite incorporará, poco a poco, los modelos de textos que se prestan, con ligeras adaptaciones, a este tratamiento.

11. Cada considerando irá numerado.

11.1. Esta práctica queda justificada por consideraciones evidentes de claridad de la legislación y facilidad de las referencias, tanto antes como después de la aprobación del texto.

11.2. Las mismas razones hacen que esta práctica sea de aplicación universal, es decir, no se aplica solamente a los actos legislativos de alcance general, sino a todo acto de las instituciones redactado en forma solemne (título, preámbulo, parte dispositiva).

11.3. La presentación es la siguiente:

«Considerando lo siguiente:
(1) [Mayúscula inicial] …
(2) [Mayúscula inicial] …»

11.4. Cuando haya un único considerando, éste no se numerará.

12. La parte dispositiva de un acto vinculante no debe contener disposiciones carentes de carácter normativo, tales como manifestaciones de deseos o declaraciones políticas, ni disposiciones que reproduzcan o parafraseen pasajes o artículos de los Tratados o confirmen una norma jurídica vigente.

Los actos no deben contener disposiciones que anuncien el contenido de otros artículos o repitan el título del acto.

Disposiciones sin carácter normativo en actos vinculantes

12.1. Los actos normativos deben ir directamente al objetivo. Los de carácter vinculante deben establecer normas, incluyendo las indicaciones (por ejemplo: el ámbito de aplicación, las definiciones) necesarias para comprender y poder aplicar correctamente estas normas. Todo lo demás es superfluo: la parte dispositiva de un acto vinculante no es el lugar adecuado para incluir deseos, intenciones o declaraciones. Hay una contradicción entre «deseable» y «vinculante».

He aquí un ejemplo que debe evitarse de disposición sin carácter normativo contenida en una Directiva:

«Con objeto de impulsar el consumo de productos que ostenten la etiqueta ecológica, y sin perjuicio de la normativa comunitaria, la Comisión y las demás instituciones de la Comunidad, así como las otras autoridades públicas en el ámbito nacional, deben dar ejemplo al especificar los requisitos que imponen a los productos»

Esta disposición expresa claramente un deseo que no obliga de ningún modo a sus destinatarios. Por tanto, su lugar adecuado no es un acto vinculante, sino más bien en una comunicación o recomendación que acompañaría al acto en cuestión.

Disposiciones que reproducen o parafrasean fragmentos o artículos de los Tratados o de otros actos

12.2. Esta práctica es inútil y peligrosa. Tomemos un acto basado en el artículo 40 del Tratado CE, debidamente mencionado en los vistos. Es inútil redactar un párrafo que reproduzca el apartado 1 del artículo 39, en virtud del cual «Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad». El redactor debe indicar cómo se propone aplicar esta disposición, en vez de repetirla. Además, tal repetición es peligrosa, ya que toda divergencia con relación a los términos originales puede dar la
impresión de que se quiso obtener un resultado diferente e incluso crear una especie de presunción en este sentido.

**Disposiciones que no hacen más que anunciar el contenido de otros artículos**

12.3. Tales disposiciones, expresadas generalmente de la siguiente forma:

«con el fin de establecer este sistema, el Consejo adoptará las medidas previstas en los artículos 3, 4 y 5»,

no añaden nada al texto legal, puesto que dichos artículos ya contienen todos los detalles convenientes relativos a su aplicación. Además, una estructura de este tipo crea confusión en cuanto a la verdadera base jurídica para una medida de ejecución futura: ¿es el artículo el que contiene la referencia, o el artículo al cual se hace referencia?

**Disposiciones que repiten el título del acto**

12.4. Incluso cuando no pueda evitarse la utilización de los términos que forman parte del título del acto (por ejemplo, en el artículo que define el objeto y el alcance del acto), es necesario que haya una plusvalía, es decir, una mayor especificación de los parámetros del texto. De lo contrario, estas disposiciones quedarían desprovistas de contenido normativo y se corre el riesgo, además, de crear una confusión en cuanto a los derechos y obligaciones consagrados por el acto.

13. En su caso, al principio de la parte dispositiva se incluirá un artículo en el que se definan el objeto y el ámbito de aplicación del acto.

13.1. El «objeto» es sobre lo que versa el acto, mientras que el término «ámbito de aplicación» designa las categorías de situaciones de hecho o de Derecho y las personas a las que se aplica el acto.

13.2. Un artículo primero que define el objeto y el ámbito de aplicación, frecuente en los acuerdos internacionales, figura también bastante a menudo en los actos comunitarios. Su utilidad debe evaluarse en cada caso.

13.3. Es ciertamente inútil si sólo constituye una paráfrasis del título. Por el contrario, puede proporcionar al lector elementos que no se habrán incluido en el título por un deseo de concisión, pero que le permiten comprobar, a primera vista, si el acto le afecta o no. Precisamente desde este punto de vista, será necesario velar para no inducir a error al lector.

Por ejemplo, si un artículo indica que el acto se aplica «a los vehículos que desarrollan una velocidad máxima de 25 km/h o más», el acto en cuestión podrá sin problemas contener algunas disposiciones que sólo son válidas, p. ej., para los vehículos que desarrollen una velocidad máxima de 50 km/h, ya que tal vehículo
entra, en cualquier caso, en el campo definido. Por el contrario, ninguna disposición debe referirse a un vehículo que desarrolle una velocidad máxima, p. ej., de 20 km/h, dado que a la vista del artículo «ámbito de aplicación» el fabricante o propietario de tal vehículo podría dejar de leer la continuación de la parte dispositiva.

13.4. A veces, la delimitación entre ámbito de aplicación y definición no queda clara. En el ejemplo siguiente, la definición dada indica al mismo tiempo el ámbito de aplicación del acto:

«Artículo 1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por “vehículo”, todo vehículo a motor destinado a circular por carretera, con o sin carrocería, con cuatro ruedas como mínimo y una velocidad máxima por construcción superior a 25 km/h, así como sus remolques. Se exceptúan los vehículos que se desplacen sobre raíles, los tractores y máquinas agrícolas y los vehículos de obras públicas».

Este artículo podría también redactarse de la siguiente manera «Artículo 1. La presente Directiva se aplicará a todo vehículo de motor destinado [...]», la frase terminará con los términos «denominado en lo sucesivo vehículo» Normalmente, esta solución es preferible. Permite enunciar de una manera más clara y más directa el ámbito de aplicación.

14. Cuando los términos utilizados en el acto no tengan un sentido unívoco, conviene agrupar en un solo artículo, al principio del acto, una definición de dichos términos. Dicha definición no debe contener elementos normativos autónomos.

14.1. Todo término debe utilizarse con el significado que tiene en el lenguaje corriente o especializado. No obstante, la claridad jurídica puede exigir que el acto mismo determine el significado de las palabras que emplea. Así sucede, en particular, si el término presenta varios sentidos, pero debe entenderse en uno solo de ellos, o si a efectos del acto se desea limitar o ampliar el sentido que se atribuye normalmente a dicho término. Hay que tener en cuenta que la definición no debe ser contraria al sentido corriente del término.

El término definido debe utilizarse a lo largo de todo el texto en el sentido precisado.

14.2. La segunda frase de la directriz denuncia un error de redacción frecuente.

14.2.1. Un ejemplo de mala redacción:

«d) «reclamación», cualquier información comunicada por [...] toda persona que tenga interés en la seguridad del buque [...] salvo si el Estado miembro juzga el
informe o la reclamación manifiestamente infundado; no se revelará al capitán ni al armador del buque de que se trate la identidad de la persona que presenta el informe o la reclamación.»

14.2.2. La frase subrayada no constituye una definición, sino un elemento normativo autónomo.

14.3. El elemento normativo debe figurar en las disposiciones normativas. En nuestro ejemplo, el redactor puede completar uno de los artículos insertando este elemento en el lugar conveniente («[...] Si el Estado miembro recibe una reclamación que no considera manifiestamente infundada [...]» y añadirá como segundo párrafo la frase «la identidad de la persona [...]»).

14.4. Cabe destacar que la exigencia de no insertar elementos normativos autónomos no está dictada únicamente por un deseo de rigor sistemático. Insertar tales elementos en la definición implica el riesgo de que el lector, en su interpretación, al no encontrar todos los elementos normativos agrupados, olvide una parte de ellos.

15. En la medida de lo posible, la parte dispositiva se redactará conforme a una estructura modelo (objeto y ámbito de aplicación, definiciones, derechos y obligaciones, disposiciones por las que se otorgan competencias de ejecución, disposiciones en materia de procedimiento, medidas de aplicación, disposiciones transitorias y finales).

La parte dispositiva se subdividirá en artículos y, según su extensión y complejidad, en títulos, capítulos y secciones. En los artículos que contengan listas, conviene diferenciar cada elemento de la lista con letras o números, mejor que con guiones.

15.1. La estructura modelo de la parte dispositiva está formada por elementos textuales varios de los cuales responden a normas de presentación más o menos estrictas. Así ocurre con los siguientes elementos:

1) objeto y ámbito de aplicación (véase la directriz 13);
2) definiciones (véase la directriz 14);
3) disposiciones que atribuyen competencias de ejecución. Las disposiciones en el ámbito de la «Comitología» siguen las normas de presentación que se reflejan en los modelos de LegisWrite;
4) medidas de aplicación. Las disposiciones relativas a las normas de desarrollo y a las fechas para la transposición de una Directiva por los Estados miembros siguen un esquema fijo (véase LegisWrite). Otras disposiciones, por ejemplo, las que se refieren a
las sanciones que deben preverse a nivel nacional, o a las vías de recurso que deben garantizarse, están previstas también de una forma estandarizada;

5) disposiciones transitorias y finales. Esta categoría de elementos incluye:
— la posible derogación de actos previos (véase la directriz 21). Si la fecha de esta derogación no coincide con la entrada en vigor del acto que debe adoptarse, dicha fecha deberá especificarse claramente;
— las normas de transición del antiguo al sistema nuevo. Es necesario utilizar un lenguaje, y sobre todo mencionar fechas, que no dejen lugar a dudas respecto al período en el que la antigua normativa, o una parte de ésta, sigue siendo aplicable de manera residual, una vez que el nuevo sistema haya entrado en vigor;
— las disposiciones modificativas del acto anterior (véase la directriz 18);
— el ámbito temporal de aplicación (véase la directriz 20).

15.2. Los otros elementos (los derechos y obligaciones, así como las disposiciones en materia de procedimiento) representan la parte propiamente normativa del acto, y su forma se modulará en función del objetivo que persiga el acto y el grado de complejidad del sistema previsto.

15.3. Cuando un artículo contenga una lista, habrá que velar por que cada elemento de ésta esté coordinado y directamente vinculado a la frase introductoria. A tal efecto, es deseable evitar la inserción de frases o párrafos autónomes en una enumeración.

Ejemplo de redacción que debe evitarse:
«Las autoridades competentes realizarán controles con el fin de cerciorarse:
— de la correspondencia entre las compras y las entregas,

Para esta comprobación se basarán, en particular, en los coeficientes comunitarios de transformación, si existen. En todos los demás casos, la comprobación se basará en los coeficientes generalmente admitidos por la industria de que se trate,
— de la utilización final correcta de la materia prima,
— del cumplimiento de las disposiciones comunitarias.»

Texto mejorado:
«Las autoridades competentes realizarán controles con el fin de cerciorarse de la correspondencia entre las compras y las entregas.»

Para esta comprobación, se basarán en los coeficientes comunitarios, si éstos existen. En todos los demás casos, la comprobación se basará en los coeficientes generalmente admitidos por la industria de que se trate.
Los controles tendrán asimismo por objeto asegurarse de la utilización correcta de las materias primas así como del cumplimiento de las disposiciones comunitarias.

15.4. Las subdivisiones orgánicas de la parte dispositiva de un acto legislativo se recogen en el siguiente cuadro. Los actos de estructura simple están constituidos por artículos y sus subdivisiones. Las subdivisiones superiores del acto comienzan con el capítulo, dividido en caso necesario, en secciones. Sólo a partir de un elevado grado de complejidad del texto, podrán agruparse los capítulos en títulos y éstos, eventualmente, en partes

Modelos de actos

2. DIRECTIVA

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de [...] relativa a [...] de EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo [...],
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (4),
Considerando lo siguiente:
(1) [Comenzar con mayúscula …].
(2) [Comenzar con mayúscula …].
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

[...] 

Artículo [...] 

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el […]. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo [...]  
La presente Directiva entrará en vigor el [...] día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Artículo [...]  
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el [...]  
Por el Parlamento Europeo  
El Presidente [...]

Por el Consejo  
El Presidente [...]

(1) DO C ... de ..., p. ....  
(2) DO C ... de ..., p. ....  
(3) DO C ... de ..., p. ....  
(4) DO C ... de ..., p. ....